Dudas y dificultades de las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes. Año 2014

I. Introducción

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° del Código Civil, la Corte Suprema ha recabado el parecer de las Cortes de Apelaciones del país, a fin de conocer las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, así como los vacíos que hayan notado en ellas en el transcurso del año 2014.

II. Metodología

La metodología aplicada consistió en recibir, analizar y sistematizar todas las dudas y dificultades comunicadas por las Cortes de Apelaciones que remitieron el correspondiente informe. A este respecto, cabe señalar que entre los remitentes también se encontraron algunos juzgados de primera instancia.

Para sistematizar las dudas y dificultades, estas se clasificaron según la materia a la que correspondían, esto es: proceso civil, proceso de familia, derecho penal y procesal penal, derecho laboral y proceso laboral, derecho administrativo y público, leyes especiales, y cuestiones orgánicas. En seguida, se aparejó a este factor (materia) la Corte o juzgado que presentó dudas o dificultades, las normas respecto de las cuales se presentaron esas dudas y dificultades, y luego la descripción sintética o transcripción de estas. Finalmente, en cada duda o dificultad se consignó si esta se trataba de una duda de interpretación, una dificultad proveniente de la norma legal, de una solicitud de reforma legal, de una solicitud de regulación normativa o bien de un vacío legal.

III. Estructura del documento

El documento se estructura en tres partes.

La primera de ellas es un resumen ejecutivo que exhibe la participación de las Cortes de Apelaciones y juzgados de primera instancia en el proceso de levantamiento de dudas y dificultades del año 2014. En esta parte se señalan las Cortes y juzgados que remitieron sus dudas o dificultades y las que no, así como la materia en la que se circunscriben esas dudas o dificultades. Asimismo, se muestra qué Corte de Apelaciones o juzgado informó no haber tenido dudas o dificultades durante el año en cuestión.

La segunda parte muestra las dudas y dificultades que fueron comunes en este proceso de levantamiento. Se trata, en definitiva, de las inquietudes de repetida ocurrencia observadas entre los informes remitidos a la Corte Suprema.

La tercera parte es la principal, pues en ella se exhiben cada una de las dudas y dificultades referidas por Cortes y juzgados, divididas por la materia a la que corresponden, y con especificación de la norma que es objeto del comentario.

IV. Resultados

Del total de Cortes de Apelaciones del país (17), las 17 remitieron informe con dudas y dificultades surgidas en la inteligencia y aplicación de las leyes en el transcurso del año 2014. También lo hicieron 6 juzgados de primera instancia.

Una Corte de Apelaciones señaló no haber tenido dudas y dificultades en el mismo período; lo propio hicieron 4 de los juzgados que participaron en este proceso.

La materia en la que más dudas y dificultades se presentaron fue en el proceso laboral: 62. La siguen el proceso penal, con 50, y el proceso de familia, con 35.

Menos dudas se presentaron en sede del proceso civil (25), en los procesos administrativo y público (3) y en los de legislaciones especial (10).

Sobre cuestiones orgánicas, en tanto, se plantearon 6 dudas y dificultades.

RESUMEN EJECUTIVO DUDAS Y DIFICULTADES EN LA INTELIGENCIA Y APLICACIÓN DE LAS LEYES AÑO 2014 POR CORTE DE APELACIONES

CORTE DE APELACIONES	DUDA O DIFICULTAD	MATERIA
ARICA	SI PRESENTA DUDAS	1. PENAL
IQUIQUE	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL PENAL 2. PROCESAL LABORAL
ANTOFAGASTA	SI PRESENTA DUDAS	1. ORGÁNICAS 2. LEYES ESPECIALES
COPIAPÓ	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL LABORAL
LA SERENA	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL CIVIL 2. FAMILIA Y PROCESO DE FAMILIA 3. PROCESAL LABORAL 4. PROCESAL PENAL 5. CONSTITUCIONAL
VALPARAÍSO	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL CIVIL 2. PENAL Y PROCESAL PENAL 3. PROCESAL LABORAL
SANTIAGO	SI PRESENTA DUDAS	1. ORGÁNICAS
SAN MIGUEL	SI PRESENTA DUDAS	1. PENAL Y PROCESAL PENAL 2. PROCESO DE FAMILIA
RANCAGUA	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL PENAL 2. LABORAL Y PROCESAL LABORAL 3. FAMILIA Y PROCESO DE FAMILIA 4. PENAL Y PROCESAL PENAL 5. LEYES ESPECIALES
TALCA	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL PENAL
CHILLÁN	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL CIVIL 2. PROCESAL LABORAL 3. PENAL
CONCEPCIÓN	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL CIVIL 2. PROCESO DE FAMILIA 3. PENAL Y PROCESAL PENAL 4. LABORAL Y PROCESAL LABORAL
TEMUCO	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL CIVIL 2. PROCESO DE FAMILIA 3. PROCESAL PENAL 4. LABORAL Y PROCESAL LABORAL
VALDIVIA	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESO DE FAMILIA Y FAMILIA 2. PROCESAL PENAL 3. ADMINISTRATIVO 4. LEYES ESPECIALES
PUERTO MONTT	NO PRESENTA DUDAS	
COYHAIQUE	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL PENAL 2. PROCESAL LABORAL 3. PROCESO DE FAMILIA 4. PROCESAL CIVIL 5. LEYES ESPECIALES 6. ORGÁNICAS
PUNTA ARENAS	SI PRESENTA DUDAS	1. PENAL Y PROCESAL PENAL 2. PROCESO DE FAMILIA 3. LABORAL Y PROCESAL LABORAL

JUECES DEL JUZGADO DE FAMILIA DE CONCEPCIÓN	NO PRESENTA DUDAS	
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE LEBU	NO PRESENTA DUDAS	
JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE SAN CARLOS	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESAL LABORAL 2. ORGÁNICA
JUZGADO DE GARANTÍA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	NO PRESENTA DUDAS	
JUZGADO LABORAL DE OSORNO	NO PRESENTA DUDAS	
JUZGADO DE FAMILIA DE PUERTO MONTT	SI PRESENTA DUDAS	1. PROCESO DE FAMILIA

DUDAS Y DIFICULTADES COMUNES EN LA INTELIGENCIA Y APLICACIÓN DE LAS LEYES ENTRE LAS CORTES DE APELACIONES DURANTE EL AÑO 2014

MATERIA	ARTÍCULOS	DUDA O DIFICULTAD	CORTES DE APELACIONES
PROCESO DE FAMILIA	Artículo 64 de la Ley 19.947 que establece la nueva Ley de Matrimonio Civil en relación con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<p>El artículo 64 de la Ley 19.947 establece que si la compensación económica no se solicitó en la demanda, el juez deberá informar a los cónyuges de la existencia de este derecho en la audiencia preparatoria.</p> <p>No obstante, a estas alturas ya está delimitada la demanda sin poder modificarse al haberse notificado al demandado, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil supletoriamente aplicables, y también ya venció el plazo para contestar la demanda y demandar reconvenzionalmente conforme al artículo 58 de la Ley 19.968.</p> <p>En consecuencia, la duda que surge es sobre si el juez puede o no brindar a las partes la posibilidad de demandar o reconvenir la compensación económica en la audiencia preparatoria.</p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de Concepción; 2.- Corte de Apelaciones de Temuco; 3.- Corte de Apelaciones de Coyhaique; 4.- Corte de Apelaciones de Punta Arenas; 5.- Juzgado de Familia de Puerto Montt.</p>
PROCESO DE FAMILIA	Artículo 12 de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.	<p>El artículo 12 de la Ley 20.066 establece un registro especial de las personas condenadas por violencia intrafamiliar. No obstante, no se regula la posibilidad de eliminar estos antecedentes.</p> <p>Esto es inconsistente con las alternativas que se dan en el proceso penal para evitar el registro de antecedentes en el extracto de filiación (por ejemplo en el caso de la suspensión condicional del procedimiento) o incluso con la posibilidad que se da en materia penal para eliminar los registros cumpliendo ciertos requisitos.</p> <p>Lo anterior produce una contradicción con lo que sucede en sede de familia, en que siempre quedará el registro del acto de violencia intrafamiliar, en circunstancias que este acto puede ser menor o no tan grave como el penal. Por ello, se da el contrasentido de que los infractores pueden eliminar los antecedentes del certificado respectivo cuando sus actos son constitutivos de delitos, pero no cuando no son constitutivos de delito.</p> <p>Esto ha generado dudas de interpretación y críticas por parte de las Cortes señaladas</p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de Coyhaique; 2.- Corte de Apelaciones de Punta Arenas; 3.- Corte de Apelaciones de Concepción.</p>
PROCESAL PENAL	Artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal.	Los artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal no abordan lo que sucede con el incumplimiento del acuerdo reparatorio, por lo que son posible distintas soluciones, generando dudas y soluciones disímiles que no se condicen con la igual aplicación de la ley.	<p>1.- Corte de Apelaciones de San Miguel; 2.- Corte de Apelaciones de Concepción; 3.- Corte de Apelaciones de Valdivia.</p>
PROCESAL PENAL	Regulación del recurso de amparo	La entrada en vigencia de la reforma procesal penal, al derogar el antiguo Código de Procedimiento Penal, dejó sin reglamentación la tramitación del recurso de amparo, por lo que se estima necesaria la regulación normativa de dicha materia.	<p>1.- Corte de Apelaciones de Temuco; 2.- Corte de Apelaciones de Rancagua.</p>
PROCESAL PENAL	Artículo 186 del Código Procesal Penal.	<i>Si bien el artículo 186 del Código Procesal Penal establece la posibilidad para el Tribunal de fijarle un plazo al Ministerio Público, para formalizar la investigación, pero no establece cuál es la sanción a imponer en el evento de incumplimiento.</i>	<p>1.- Corte de Apelaciones de San Miguel; 2.- Corte de Apelaciones de Talca.</p>

<p>PROCESAL LABORAL</p>	<p>Artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo</p>	<p>El artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo establece que si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho a solicitar nuevo día y hora para su realización dentro de quinto día.</p> <p>No obstante, no se contempla una sanción expresa para la inasistencia de ambas partes a la audiencia y la falta de solicitud de nueva fecha de audiencia dentro de quinto día.</p> <p>Del mismo modo, tampoco existe referencia alguna a la regulación de la inasistencia de las partes a la audiencia de juicio, por lo que surge la duda sobre si puede el tribunal tomar de oficio la audiencia de juicio si ninguna de las partes asiste a la misma o debe adoptar una decisión distinta.</p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de Temuco; 2.- Corte de Apelaciones de Coyhaique; 3.- Corte de Apelaciones de Punta Arenas.</p>
<p>PROCESAL LABORAL</p>	<p>Artículo 454 del Código del Trabajo</p>	<p>En el Código del Trabajo no existe norma especial para regular la prueba nueva o prueba ignorada o la prueba sobre prueba, como en el caso del Código Procesal Penal en su artículo 336, de gran utilidad para los intervinientes y Juzgadores, especialmente si el artículo 451 del citado cuerpo legal exige que las partes deberán sólo "señalar" al Tribunal los medios de prueba de que piensan valerse, de manera que, en el caso de alguna prueba documental, ni el Tribunal ni la contraparte se enterará de su contenido como para refutarla o impugnarla.</p> <p>Por tanto, se advierte un vacío legal que es necesario solucionar, puesto que la prueba nueva es admitida tanto en los procesos penales como en los seguidos ante los Tribunales de Familia, sin que se divise razón alguna que impida que en los procesos laborales se siga la misma regla.</p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de Rancagua; 2.- Corte de Apelaciones de Chillán; 3.- Corte de Apelaciones de Coyhaique; 4.- Juzgado de Letras y Familia de San Carlos.</p>
<p>PROCESAL LABORAL</p>	<p>Artículo 478 del Código del Trabajo</p>	<p>El artículo 478 del Código del Trabajo establece que el tribunal ad quem deberá dictar sentencia de reemplazo en el caso de acoger el recurso de nulidad fundado en, entre otras, las causales de las letras b) y e) del mismo artículo.</p> <p>No obstante, este imperativo contraviene el principio de inmediación consagrado por el artículo 427 del mismo Código del Trabajo, el que incluso sanciona con nulidad el incumplimiento de este deber. La dictación de sentencia de reemplazo obliga necesariamente al tribunal ad quem a entrar al análisis y ponderación de la prueba rendida ante otro órgano resolutor, el tribunal a quo, lo que contraviene el principio reseñado.</p> <p>Por tanto, pareciera más acertado establecer que de acogerse el recurso de nulidad, deberá dictarse sentencia declarando la nulidad del juicio y de la sentencia, a fin de que el juez no inhabilitado conozca del nuevo juicio y con la prueba ante él rendida proceda a la dictación del nuevo fallo.</p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de La Serena; 2.- Corte de Apelaciones de Coyhaique.</p>

<p>PROCESAL LABORAL</p>	<p>Artículo 482 del Código del Trabajo (Plazo sentencia nulidad)</p>	<p>El artículo 482 del Código del Trabajo establece que la sentencia definitiva que resuelva el recurso de nulidad debe pronunciarse dentro de 5 días desde el término de la vista de la causa.</p> <p>No obstante, varias Cortes de Apelaciones han reclamado que este plazo es absolutamente insuficiente , porque muchas veces es necesario oír el audio de las causas y porque al estar fijada la vista de todas las causas laborales para un mismo día, de acuerdo al artículo 484 del Código del Ramo, se produce el problema de tener que fallar todas las nulidades del día dentro del mismo plazo, el que además debe ser utilizado para fallar recursos de amparo y protección, que tienen plazos más breves o iguales, según el derecho vulnerado, en este caso.</p> <p>Por ello, una de las Cortes propone que, en consideración a la complejidad y trascendencia de las materias , se extienda el plazo a 30 días contados desde el término de la vista de la causa. Además, propone que, en el caso de estar involucrados varios trabajadores y varias causales de nulidad opuestas por diversas partes, se faculte al tribunal para ampliar el plazo en proporción al número de personas que conforman cada parte, cuya situación de hecho difiere y exige análisis de diferentes antecedentes, en conjunto con un criterio basado en el número de partes que recurren, el número de causales y capítulos dentro de cada causal planteada en los recursos de nulidad.</p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de Rancagua; 2.- Corte de Apelaciones de Valparaíso; 3.- Corte de Apelaciones de Temuco; 4.- Corte de Apelaciones de Punta Arenas.</p>
<p>PROCESAL LABORAL</p>	<p>Abandono del recurso de apelación, en relación con el artículo 481 del Código del Trabajo.</p>	<p><i>Procedencia o no del abandono del recurso de apelación en materia laboral, por inasistencia del recurrente a la audiencia correspondiente en la Corte de Apelaciones, tal como lo establece el artículo 481 del Código del Trabajo para el recurso de nulidad.</i></p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de Talca; 2.- Corte de Apelaciones de Concepción;</p>
<p>PROCESO CIVIL</p>	<p>Artículo 521 del Código de Procedimiento Civil</p>	<p>Se plantean dudas respecto a la naturaleza jurídica del procedimiento de tercería y en especial en relación a la naturaleza jurídica de la sentencia que la resuelve, su forma de notificación y el plazo para apelar de la misma.</p>	<p>1.- Corte de Apelaciones de La Serena; 2.- Corte de Apelaciones de Talca; 3.- Corte de Apelaciones de Concepción.</p>

MATERIA	CORTE DE APELACIONES	ARTÍCULO	DUDA O DIFICULTAD	ID
PROCESAL CIVIL	ANTOFAGASTA	Artículo 50 del Código Civil.	<p><i>Se postula la necesidad de adecuar la legislación general respecto del cómputo de los plazos ya que el artículo 50 establece en términos generales para la República que los plazos señalados por las leyes, Presidente de la República, Tribunales o Juzgados comprenden los días feriados, a menos que excepcionalmente se exprese lo contrario; norma que hoy genera una confusión a propósito del artículo 25 de la Ley que establece las bases de los procedimientos administrativos que rige los actos de los órganos de la Administración del Estado, Ley 19.880, porque como regla general estatuye que el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos es de días hábiles, incluyendo los sábados [en los días inhábiles].</i></p> <p><i>Esta confusión legislativa ha traído graves problemas en la interpretación de los plazos cuando se trata de procedimientos administrativos previos, como los asuntos de agua, mineros y especialmente laborales que ha generado jurisprudencia contradictoria, por lo tanto se propone la modificación del artículo 50 del Código Civil, en términos de establecer como regla general que el cómputo de los plazos de días, debe serlo descontado los sábados, domingos y festivos, salvo que se exprese determinadamente que el plazo es corrido.</i></p>	Solicitud de reforma legal
			<p>Existen dudas respecto de la naturaleza jurídica de la sentencia que resuelve las tercerías de posesión, especialmente para los efectos de determinar el plazo de impugnación de las mismas.</p> <p>De considerarse la tercería de posesión un incedente en atención a la tramitación que ordena el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que la resuelva sería una sentencia interlocutoria, siendo procedente el recurso de apelación dentro de cinco días conforme al artículo 189 del Código de Procedimiento Civil.</p> <p>En cambio, si se considera que la tercería de posesión constituye una contienda en sí, cuyo objeto difiere del juicio principal, entonces la sentencia que la resuelve sería una sentencia definitiva, siendo procedente el recurso de apelación dentro de diez días conforme al artículos 189 del Código de Procedimiento Civil.</p>	Duda de interpretación
	VALPARAÍSO	Desarrollo de las audiencias de la Ley N° 20.720 que sustituye el Régimen Concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo.	<p><i>Aplicación de la llamada nueva de Ley de Quiebras, teniendo presente que la señalada normativa no establece en forma expresa la inmediación y la oralidad, resultando dudas en relación a la forma de desarrollo de las audiencias.</i></p>	Duda de interpretación
			<p>Artículos 124 y 125 de la Ley N° 20.720 que sustituye el Régimen Concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo.</p> <p><i>Artículos 124 y 125, respecto a la incongruencia de los plazos establecidos y la procedencia de recursos.</i></p>	Duda de interpretación
			<p>Artículos 124, 125 y 126 de la Ley N° 20.720 que sustituye el Régimen Concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo.</p> <p><i>Artículos 124, 125 y 126, referido a la audiencia de prueba al quinto día, pero, además, se concede un plazo al perito para la presentación de su informe al séptimo día, después de efectuada la audiencia de prueba.</i></p>	Vacío legal

	Artículo 591 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales en relación con el 773 del Código de Procedimiento Civil.	<i>La problemática presentada en el otorgamiento de fianza de resultas respecto de la parte que goza de privilegio de pobreza, pues la regulación de éste, en los artículos 591 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, no advertiría tal situación.</i>	Vado legal
	Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 222 del mismo cuerpo legal.	<i>El artículo 48 del Código de Procedimiento Civil dispone que las sentencias definitivas, sin distinguir, deben ser notificadas por cédula. Sin embargo, hay que entender que la norma se refiere a las de primera y única instancia, pues el artículo 221 del citado código señala que las resoluciones que se dicten en segunda instancia se notifican por el estado diario.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 323 del mismo cuerpo legal.	<i>El artículo 48 del código antes indicado, sostiene que las resoluciones que reciben la causa a prueba se notifican por cédula, sin embargo, la resolución que recibe el incidente a prueba se notifica por el estado diario, según lo dispuesto en el artículo 323 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 3 y 181 del mismo cuerpo legal.	<i>La resolución que recibe los incidentes a prueba no es apelable, de acuerdo al inciso final del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, la norma nada dice en relación al recurso de reposición. Ahora, por aplicación supletoria, en virtud del artículo 3 del aludido cuerpo de normas, sería susceptible de tal recurso.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 339 del mismo cuerpo legal.	<i>En lo atinente al término probatorio en los incidentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 inciso 3° del Código de Procedimiento Civil, no procederían los aumentos extraordinarios contemplados en el juicio ordinario de mayor cuantía; considerándose por que sí proceden los términos especiales por la aplicación supletoria del juicio ordinario de mayor cuantía ya señalada.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.	<i>En el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, se sostiene que la tercería de dominio se sustanciará de acuerdo a los trámites del juicio ordinario, pero sin los escritos de réplica ni réplica. Por otra parte, expresa que las tercerías de posesión, prelación y pago se tramitarán como incidente.</i> <i>La interrogante es, por tanto, si las tres tercerías antes aludidas son efectivamente un incidente o si sólo se aplican las normas de éstos para su tramitación, lo que tiene alcance, por ejemplo, para la notificación de la resolución que las falle y los recursos que procedan en su contra.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 191 del Código de Procedimiento Civil.	<i>La inconsecuencia de que da cuenta el inciso final del artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, referido a la apelación concedida en ambos efectos, en cuanto señala que el tribunal de primer grado puede entender en la declaración de la deserción de la apelación, en circunstancias que este modo anormal de poner término a la apelación sólo opera cuando ella se concede en el solo efecto devolutivo y no se ha dejado dinero suficiente, en concepto del Secretario del tribunal de primera instancia, dentro del término de quinto día, contado desde la resolución que lo concede, para la confección de las compulsas que, por cierto, no deben obtenerse al concederse la apelación en ambos efectos.</i>	Dificultades por normas legales

IALCA

<p>Artículo 199 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 216 y 217 del mismo cuerpo legal.</p>	<p><i>Procede la adhesión a la apelación que se verá en cuenta, ya que el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, sólo señala que si no se solicitan alegatos dentro del plazo para comparecer en segunda instancia, el efecto previsto es el indicado, que la apelación se verá en la forma dicha, pero no excluye la posibilidad de adhesión, lo que tampoco hacen los artículos 216 y 217 del mismo Código.</i></p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>Artículo 217 del Código de Procedimiento Civil.</p>	<p><i>El inciso 2° del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil refiere que no será admisible la adhesión a la apelación desde el instante en que el apelante haya presentado escrito para desistirse de la apelación. Creemos que tampoco procede adherirse cuando han operado las otras formas anormales de poner término a la apelación, a menos que al momento de la adhesión haya estado aún pendiente la apelación.</i></p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>Adhesión a la casación</p>	<p><i>La duda en cuanto a si procede o no la adhesión a los recursos de casación (forma y fondo), si se tiene en consideración que en materia penal se contempla expresamente para el recurso de nulidad.</i></p>	<p>Vado legal</p>
<p>Artículo 800 N° 3 del Código de Procedimiento Civil.</p>	<p><i>El artículo 800 N° 3 del Código de Procedimiento Civil establece como trámite o diligencia esencial en segunda instancia la citación para oír sentencia definitiva. Antes que se modificara el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil por la Ley N° 19.317, del 8 de agosto de 1994, la vista de la causa comprendía la notificación del decreto en relación, la inclusión de la causa en tabla, el anuncio y la vista de la causa propiamente tal (relación y alegatos). Con la modificación de dicho artículo, la vista de la causa quedó reducida a la relación y los alegatos, por lo que, además de la vista de la causa en los términos actuales, la citación para oír sentencia en segunda instancia comprendería, también, los otros trámites indicados.</i></p> <p><i>En las apelaciones que se ven en cuenta no habría tal trámite o diligencia esencial en la segunda instancia.</i></p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>Artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales en relación con el artículo 82 de la Constitución.</p>	<p><i>El recurso de queja procede en contra de sentencias ejecutoriadas, pues dentro de las hipótesis que señala el artículo 545 inciso primero del Código Orgánico de Tribunales, es que ellas no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, lo que constituye el primer caso de firmeza o ejecutoriedad de una sentencia definitiva o interlocutoria al tenor de lo previsto en los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, estimamos que, al menos, el dicho recurso tiene vicios de inconstitucionalidad pues si bien el inciso 2° del artículo 82 de la Constitución Política de la República faculta a los tribunales superiores de justicia, en uso de sus atribuciones disciplinarias, para invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y formas que establezca la Ley Orgánica Constitucional respectiva no lo es menos que el artículo 76 inciso 1° del mismo texto constitucional señala que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno hacer revivir procesos fenecidos. Se estima que tal prohibición, con igual o mayor razón, debiera regir para los tribunales superiores de justicia pues, además, ello atenta contra la certeza jurídica que producen las sentencias firmes, salvo los casos expresamente establecidos por el legislador, cuyo no sería el presente.</i></p> <p><i>El Ministro Hernán González García estuvo por expresar la necesidad de eliminar el recurso de queja y, en todo caso, por tener en cuenta que la regla sobre aplicación de medidas disciplinarias es inconstitucional, pues no se condice con las normas sobre los acuerdos de los tribunales superiores de justicia.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>

CHILLÁN	Artículo 8 N° 10 de la Ley 18.101.	<i>En relación al principio de igualdad procesal presenta problemas la aplicación del artículo 8° numeral 10, de la Ley 18.101, al permitir la comparecencia personal de las partes sin patrocinio de abogado en causas cuya cuantía sea por rentas inferiores a 4 UTM. Lo anterior muchas veces crea más indefensión que defensa, de una de las partes que comparece sin abogado frente a su contradictora que si cuenta con asesoría letrada.</i>	Dificultades por normas legales
CONCEPCIÓN	Artículo 214 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 213y 177 del mismo cuerpo legal.	<i>Respecto a cuál es la naturaleza jurídica de la resolución que ordena traer los autos en relación, principalmente en cuanto al efecto vinculante del control de admisibilidad efectuado por la sala tramitadora respecto a otras salas que conocen del recurso.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.	<i>Problemas relacionados con la tramitación y notificación de las tercerías, en cuanto a si se tramitan como un juicio separado o un incidente dentro del mismo, y con todas las consecuencias procesales que ello implica. (Forma de notificación de la demanda, de la resolución que recibe la causa a prueba, de la sentencia y del plazo para apelar).</i>	Duda de interpretación
TEMUCO	Artículo 8 N° 3 de la Ley 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos en relación con el Artículo 387 del Código de Procedimiento Civil.	El artículo 8 N° 3 de la Ley 18.101 obliga al actor a indicar todos los medios de prueba de que se valdrá, lo que incluye la confesional, debiendo acompañarse el sobre de posiciones en la demanda para notificar la citación a absolver posiciones junto al libelo. La duda que surge en caso de falta de comparecencia del demandado/absolvente a la audiencia de estilo es si a) bastará esa incomparecencia para hacer efectivo el apercibimiento de tenerlo por confeso por la naturaleza breve y concentrada del procedimiento o b) si será necesaria una segunda citación para hacer efectivo el apercibimiento en aplicación de las reglas supletorias, debiéndose entender que la audiencia celebrada correspondió a la primera audiencia.	Duda de interpretación
	Artículo 8 N° 5 y 6 de la Ley 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos en relación con el Artículo 387 del Código de Procedimiento Civil.	Conforme al artículo 8 N° 5 y 6 de la Ley 18.101, la prueba ofrecida por el demandado en la contestación debe rendirse en la audiencia de estilo, lo que incluye la confesional. No obstante, el actor puede no haber comparecido personalmente a la audiencia, sino que sólo representado al no saber que sería citado. Entonces, surge la duda respecto de si deberá citarse personalmente al actor a una audiencia especial para absolver posiciones o si la audiencia de estilo servirá como primera citación atendida la naturaleza breve y concentrada del procedimiento.	Duda de interpretación

COYHAIQUE	Artículo 698 N° 7 del Código de Procedimiento Civil.	<p>En relación al artículo 698 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte de Apelaciones señala que <i>"El referido numeral, trae consigo problemas en cuanto a su aplicación, ya que si bien puede una parte deducir apelación en contra de una resolución que afecte a la Sentencia Definitiva, como por ejemplo, en cuanto a la rendición de una prueba y, dado que ya se ha dictado sentencia en el proceso y de ésta no se ha apelado, se puede llegar a decisiones contradictorias o al menos sentencias que pugnen con lo resuelto por el Tribunal de primera instancia, sin que, como en otros procesos ocurre (Ley N° 18.101), las Cortes tengan la facultad de pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera instancia, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado."</i></p> <p>El problema se da por la posibilidad de interponer un recurso de apelación respecto de cualquier resolución del procedimiento y la obligación del juez de fallar aun cuando se encuentre pendiente la concesión del recurso, porque puede ocurrir que lo apelado sea de trascendental importancia para la decisión del asunto controvertido.</p> <p>Por ello, <i>"se estima por esta Corte, que sería prudente, un cambio legislativo en orden a hacer apelable sólo la sentencia definitiva, otorgándosele al Tribunal de Segunda instancia la facultad de pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera instancia, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado."</i></p>	Dificultades por normas legales
	Extender artículo 50 del Código Procesal Penal a los juicios civiles.	<p><i>Se estima conveniente hacer extensivo el artículo 50 del Código Procesal Penal a los juicios civiles, cuando la demanda se estime temeraria y el abogado o apoderado demuestre desconocimiento grave del derecho. Se han visto muchos casos en que los abogados equivocan la acción o actúan negligentemente, a veces con inexcusable ignorancia de la ley, y el usuario además de perder un juicio, arriesga sus bienes, dinero y, además, debe pagar las costas en todas las instancias; en circunstancias que éstas deberían ser enteradas por el abogado responsable, como precisamente lo contempla el artículo 50 antes citado.</i></p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 776 del Código de Procedimiento Civil.	<p><i>Se cree que sería útil modificar la disposición del artículo 776 del Código de Procedimiento Civil, para que a las Cortes de Apelaciones se les otorgue la facultad de resolver la admisibilidad del recurso de casación y no limitarla a revisar si está patrocinado por abogado habilitado y sí se presentó dentro del plazo legal, sirviendo solo de buzón. Con ello se evitaría el recargo de trabajo de la Excm. Corte Suprema y la resolución de la Iltma. Corte que resuelva sobre la admisibilidad del recurso, podría ser apelable.</i></p>	Solicitud de reforma legal

MATERIA	CORTE DE APELACIONES	ARTÍCULO	DUDA O DIFICULTAD	ID
PROCESO DE FAMILIA	LA SERENA	Artículo 4 de la Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias en relación con el artículo 67 N° 1 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<p>Existen dudas respecto de los recursos y oposiciones a la resolución que decreta alimentos provisorios. El artículo 4 de la Ley 14.908 establece que la resolución que decreta los alimentos provisorios es susceptible de reposición con apelación subsidiaria.</p> <p>No obstante, surgen distintas dudas en torno a estos recursos y la posibilidad de deducir oposición. <i>¿Cómo se concilian los recursos con la oposición al monto de los alimentos provisorios? ¿Podría el demandado recurrir de reposición con apelación subsidiaria sin haber presentado previamente una oposición a los alimentos provisorios? ¿Qué pasa si además de la oposición repone y apela en subsidio en la misma oportunidad? ¿Deberá en tal caso esperarse a que se resuelva la oposición dejando pendiente el pronunciamiento de los recursos para entonces?</i></p> <p>Por otro lado, surgen dudas relativas con la forma de interposición de estos recursos, en relación con el artículo 67 N° 1 de la Ley 19.968. Esta norma señala que la reposición deberá interponerse dentro de tercero día, a menos que dentro de dicho término tenga a lugar una audiencia, en cuyo caso debe interponerse y resolverse en la misma, desprendiéndose de ello que la reposición deberá hacerse valer verbalmente. <i>Entonces, la duda surge para el caso de la situación del artículo 4 inciso sexto de la Ley 14.908 cuando se deduce la reposición con apelación subsidiaria, pues si se verifica en una audiencia tendrá que interponerse en la reposición misma y de acuerdo a las reglas generales la apelación deberá ser interpuesta por escrito y, en su caso, los fundamentos de la reposición sirven para el recurso de apelación subsidiaria que se entabla, pero ¿Cómo se concilia la exigencia de una apelación por escrito con una apelación subsidiaria de una reposición que ha debido deducirse y resolverse en una audiencia y por lo tanto en forma verbal?</i></p>	Duda de interpretación
		Artículo 57 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia en relación con el artículo 106 del mismo cuerpo legal.	<p>En relación a los casos de divorcio unilateral con hijos menores de edad surge la duda en relación a si la mediación previa sobre las materias relacionadas con alimentos, cuidado personal y relación directa y regular de los hijos es un requisito de admisibilidad de la demanda.</p> <p>Algunos señalan sólo se ha excluido de la obligatoriedad de la mediación previa al divorcio culpable y aquellos en que ha existido acuerdo de las partes en las materias reseñadas en el artículo 106, debiendo, por tanto, a someterse el divorcio unilateral a la mediación previa, en especial por la exigencia del artículo 89 de la Ley de Matrimonio de Civil de tratar conjuntamente con la solicitud de divorcio las materias relacionadas con el régimen de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular de los hijos; materias en las que precisamente el artículo 106 de la Ley 19.968 exige la mediación previa obligatoriamente.</p> <p>No obstante, otros señalan que las únicas exigencias contempladas para la acción de divorcio unilateral serían la establecidas en el inciso primero del artículo 57 de la Ley 19.968, sin que se incluyera al divorcio unilateral entre las materias sujetas a mediación previa por disposición del artículo 106 del mismo cuerpo legal. Además, nada obstaría a que se aplicara el inciso segundo del artículo 54-1 de la Ley 19.968 en caso que se demandara alguna de las materias sujetas a mediación previa obligatoria junto a la acción de divorcio unilateral.</p>	Duda de interpretación
	SAN MIGUEL	Artículo 49 de la Ley 16.618 que fija la Ley de Menores en relación con el artículo 55 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<p><i>Surgen dudas en cuanto a la competencia de los Juzgados de Familia, relacionando los artículos 49 de la Ley N° 16.618 y 55 de la Ley N° 19.968, ya que para la materia no se indica un procedimiento especial a aplicar y por la habitual necesidad de darle una tramitación rápida, al observar el procedimiento ordinario, se dilata la resolución del asunto.</i></p>	Dificultades por normas legales

RANCAGUA	Artículo 106 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<i>Se ha advertido que existen distintos criterios para resolver sobre acuerdos de cuidado personal ante los centros de mediación, toda vez que en algunos tribunales se aprueban sin reparos, y en otros derechamente no se aprueban, o bien se cita a una audiencia. Se hace necesario analizar el artículo 166 [106] de la Ley 19968 y la normativa del Código Civil al respecto.</i>	Dificultades por normas legales
	Artículo 77 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<i>En materia de protección la mayoría de la resoluciones ordenan derivar a los niños y padres a procesos de intervención, ante la resistencia de las partes para participar en dichos procesos y no siendo pertinente sustituir la medida, surgen dudas respecto a la manera de hacer cumplir lo ordenado, de acuerdo al artículo 77 de la Ley 19968, ya que esta norma es imprecisa en cuanto a los apremios a aplicar para el cumplimiento forzado.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 102 N° de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<i>En relación al artículo 102 N de la ley 19968, surgen dudas respecto al procedimiento a aplicar, ya que algunos tribunales inician una causa de protección sujeta al procedimiento correspondiente, sin embargo, en otros se cita a la audiencia especial que señala el artículo sin los trámites de una causa de protección.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 21 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<i>Se mantiene el vacío legal en cuanto a la aplicación del artículo 21 de la ley 19968, ya que frente a la inasistencia de las partes a audiencia preparatoria, no se señala apercibimiento alguno ni un número limitado de solicitudes para la continuación del procedimiento, impidiendo que el tribunal pueda poner término a dichas causas.</i>	Duda de interpretación
CONCEPCIÓN	Artículo 64 de la Ley 19.947 que establece la nueva Ley de Matrimonio Civil en relación en relación con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<i>La aplicación del artículo 64 de la ley de matrimonio civil, que obliga a informar en el juicio de divorcio a los cónyuges el derecho que tienen a solicitar compensación económica, en relación con el artículo 58 de la ley 19.968, que restringe la oportunidad para demandar reconvenzionalmente.</i>	Vacío legal
	Artículo 12 de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.	<i>La ley 20.066 y la ley 19.968, no contemplan la posibilidad que las condenas por Violencia Intrafamiliar puedan borrarlas del registro de condenados en esta materia. ¿Puede aplicarse la normativa que regula en lo penal esta materia?</i>	Duda de interpretación
	Artículo 106 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<p>El artículo 106 de la Ley 19.968 establece una mediación obligatoria para las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho a una relación directa y regular, la que debe ser previa a la interposición de la demanda.</p> <p>La duda que surge es si el demandado puede reconvenir sobre estas materias aún cuando no haya existido mediación previa. En la afirmativa, ¿debería suspenderse el procedimiento derivando la causa a mediación?</p>	Vacío legal

TEMUCO

<p>Artículo 23, inciso octavo, de la Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p>El artículo 23 exige a los patrocinantes de las partes indicar en su primera actuación otra forma de notificación para sí, bajo el apercibimiento de serles notificadas las resoluciones por el estado diario.</p> <p>La duda que surge es si esta obligación alcanza también a los mandatarios judiciales no patrocinantes.</p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 64 de la Ley 19.947 que establece Nueva Ley de Matrimonio Civil en relación con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p>El artículo 64 de la Ley 19.947 establece que si la compensación económica no se solicitó en la demanda, el juez deberá informar a los cónyuges de la existencia de este derecho en la audiencia preparatoria.</p> <p>No obstante, a estas alturas ya está delimitada la demanda sin poder modificarse al haberse notificado al demandado, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil supletoriamente aplicables, y también ya venció el plazo para contestar la demanda y demandar reconvenzionalmente conforme al artículo 58 de la Ley 19.968.</p> <p>En consecuencia, la duda que surge es sobre si el juez puede o no brindar a las partes la posibilidad de demandar o reconvenir la compensación económica en la audiencia preparatoria.</p>	<p>Vario Legal</p>
<p>Artículo 2 de la Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias en relación con el artículo 23 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p><i>"Correcta aplicación del artículo 2º inciso 1º de la ley 14.908 en relación con el artículo 23 de la ley 19.968."</i></p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 106 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia en relación con los artículos 141 y 145 del Código Civil.</p>	<p>El artículo 106 de la Ley 19.968 no excluye de la mediación voluntaria a la declaración de bienes familiares. No obstante, de los artículos 141 y 145 del Código Civil se infieren restricciones a las materias que pueden ser de acuerdo de los cónyuges.</p> <p>Entonces, la duda que surge es si pueden o no ser sometidas a mediación las materias relacionadas con declaración de bienes familiares.</p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículos 67 N° 2 y 3 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p>La duda que existe se refiere a la extensión de las normas del artículo 67 N° 2 y 3 de la Ley 19.968 en relación con la admisibilidad de los recursos de apelación, en especial a si se aplican las disposiciones restrictivas de la apelación de esas normas a los procedimientos de cumplimiento en materias de familia.</p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 17 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia en relación con el artículo 1 de la Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pensiones Alimenticias.</p>	<p>El artículo 17 de la Ley 19.968 regula la acumulación necesaria de causas, por la cual el juez de familia debe conocer todos los asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se tramiten bajo el mismo procedimiento.</p> <p>No obstante, la duda que ha surgido es si ella es posible cuando se han presentado ante el juez de familia demandas sobre materias con igual procedimiento, pero en que la competencia territorial es diversa.</p>	<p>Vario Legal</p>

<p>VALDIVIA</p>	<p>Artículo 10 de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.</p>	<p>El artículo 10 de la Ley 20.066 establece que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, el juez debe poner en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, el arresto hasta por 15 días.</p> <p>La duda que surge es si basta el incumplimiento puro y simple para hacer procedente lo señalado o si es necesario que el incumplimiento vaya acompañado de un ánimo especial o del desprecio por los dictámenes judiciales.</p> <p>También existe la duda sobre si es aplicable lo señalado en caso que la persona favorecida por la medida toleró, permitió y hasta procuró su desatención.</p>	<p>Duda de Interpretación</p>
	<p>Recurso de hecho.</p>	<p>Siendo procedente el recurso de hecho en materia de familia, la duda que surge es desde cuando se cuenta el plazo para la interposición de este medio de impugnación en primera y segunda instancia respectivamente, toda vez que en este procedimiento no es necesaria la comparecencia de las partes para la vista de la causa.</p>	<p>Duda de Interpretación</p>
	<p>Artículo 67 N° 2 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p>El artículo 12 de la Ley 19.968 consagra el principio de inmediación en el procedimiento de familia, ordenando que las audiencias y diligencias de prueba se realicen en presencia del juez, quien debe formar su convicción sobre la base de las pruebas que personalmente haya recibido.</p> <p>No obstante, el artículo 67 N° 2 de la Ley 19.968 hace procedente el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada por un juez que adquirió convicción en virtud de la inmediación, lo que resulta inconveniente desde un punto de vista constitucional por cuando el tribunal de alzada no forma su convicción con pruebas apreciadas en forma personal por los Ministros.</p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>
	<p>Conciliación en casos de violencia intrafamiliar (Ley 20.066).</p>	<p><i>Se estima necesaria la procedencia de la conciliación en casos de mínima violencia, pudiendo perfeccionarse al efecto mecanismos de control para verificar que los acuerdos se cumplan.-</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>
	<p>Artículo 12 de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.</p>	<p><i>Es necesario mencionar el inconveniente que existe en cuanto a la eliminación de antecedentes en materia de violencia intrafamiliar cuando se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 12 de la Ley N° 20.066 sobre registro de sanciones y medidas accesorias, toda vez, que no existe norma al respecto que regule la materia en Ley N° 19.968. Por el contrario, cuando los antecedentes por violencia intrafamiliar pasan a sede de Garantía, porque los hechos son constitutivos de delito, existen salidas alternativas, en las cuales el imputado puede quedar sin antecedentes en el extracto de filiación, como sería el caso de una suspensión condicional del procedimiento y a pesar de tratarse de delitos o si es condenado puede posteriormente eliminar los antecedentes si cumple con determinados requisitos. Entonces se produce la contradicción que en sede de familia donde el acto de violencia intrafamiliar puede ser menor o no tan grave, los infractores no pueden eliminar los antecedentes del certificado respectivo, pero si cuando son constitutivos de delito.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>

COYHAIQUE

<p>Artículo 8 de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar en relación con los artículos 174 y 240 del Código de Procedimiento Civil y 27 y 63 N° 3 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p><i>Este artículo relativo a la sanción de multa, en cuanto en su inciso segundo prescribe que "El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el Juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días". Agregando el inciso tercero, que frente al incumplimiento, el Tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.-</i></p> <p><i>Dicha norma plantea problemas en su aplicación estricta, dado que, la regla general, contenida en el artículo 174 del Código [Procedimiento] Civil, aplicable en la especie por lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 19.968, es el que las resoluciones producen efectos desde que causan ejecutoria o se encuentran ejecutoriadas.-</i></p> <p><i>De seguirse el tenor literal de la norma bien puede darse el caso que, impugnada que fuere la sentencia, aún con el plazo que la ley confiere en forma adicional para prorrogar el pago, haya de hacerse cumplir, toda vez que este tipo de sentencias, apeladas que fueren, el recurso, por lo dispuesto en el artículo 67 número 3, de la ley 19.968, debe concederse en el sólo efecto devolutivo, no encontrándose en ninguna de las situaciones que establece el mismo número; lo que conlleva, en caso de cumplimiento y entero del pago, y frente a una revocación de lo resuelto, la problemática de la devolución de la multa; y, con muchos y mayores problemas frente al incumplimiento que implicaría activar la persecución penal de parte del Ministerio Público.-</i></p> <p><i>Por ello, la solución a los problemas anotados pasaría por expresar que el condenado deberá pagar la multa impuesta en el término de cinco días, ejecutoriada que se encuentre la sentencia.-</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>
<p>Artículo 64 de la Ley 19.947 que establece Nueva Ley de Matrimonio Civil en relación con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p>El artículo 64 de la Ley 19.947 establece que si no se hubiere solicitado compensación económica en la demanda, el juez informará a los cónyuges la existencia de este derecho durante la audiencia preparatoria.</p> <p>No obstante, el artículo 58 de la Ley 19.968, modificado por la Ley 20.286, establece que la reconvenición debe hacerse por escrito con al menos cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia preparatoria.</p> <p>Por tanto, se advierte en la actualidad que la información que debe dar el juez en la audiencia preparatoria sobre la existencia del derecho a reclamar compensación económica resulta procesalmente inocua, toda vez que no existe forma legal de que pueda impetrarse la mentada acción compensatoria, sea por vía principal, por impedirlo el artículo 27 de la Ley 19.968, en relación al inciso primero del artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que en la audiencia preparatoria, se entiende que la demanda ya se encuentra contestada real o fictamente; sea por vía reconvenicional, por aplicación del nuevo artículo 58 de la Ley 19.968, que obliga a reconvenir por escrito con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia preparatoria.-</p>	<p>Vacío legal</p>
<p>Artículo 66 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p><i>Esta disposición señala que la respectiva cuota de la compensación económica, se "considerará alimentos" para los efectos de su cobro, lo que ha generado diversas interpretaciones al respecto en cuanto a si procede o no despachar arrestos por su no pago.-</i></p> <p><i>Por lo delicado de esta materia, se ha estimado que dicha medida no procede, toda vez que la naturaleza jurídica de la institución creada en el artículo 61 de la referida Ley, es notablemente "indemnizatoria" o de una "deuda de carácter civil general", de suerte que el privar de libertad al cónyuge moroso en el pago de la misma, estaría vulnerando el Pacto de San José de Costa Rica, (norma de rango Constitucional), en tanto prescribe que nadie podrá ser sometido a prisión por deudas, estableciéndose como única excepción, el caso de los alimentos que se debe por Ley a ciertas personas, cuya naturaleza es claramente distinta a la de las demás deudas de carácter civil.-</i></p> <p><i>Así entonces, en la práctica se ha considerado que en estos casos, sólo procede la aplicación de las medidas contenidas en los artículos 11 y siguientes de la Ley 14.908, con excepción del arresto.-</i></p> <p><i>Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente la enorme disparidad de criterios a nivel nacional, encontrándose en la actualidad dividida la</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>

	<p><i>jurisprudencia en este punto, razón por la cual, con el fin de dar certidumbre a los justiciables, se podría explorar la posibilidad de una ley aclaratoria que zanje esta situación.-</i></p>	
<p>Artículo 80 bis de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p>	<p><i>Del examen del inciso segundo, se advierte que es deber del Servicio Nacional de Menores, crear la oferta específica con el objeto de que el niño (a) o adolescente, que se encuentre en alguna situación de riesgo o vulnerabilidad social, pueda ser sujeto de atención en aquellas regiones donde el Estado no cuenta con oferta programática específica para ese caso en particular, como por ejemplo, conductas infraccionales de menores de 14 años.-</i></p> <p><i>Sobre esta situación, cabe precisar que, en la práctica, por la ausencia total de programas que aborden el ejemplo ya descrito, se ha transformado en un aumento de cupos en programas que no están destinados, desde el punto de vista técnico, a tratar a jóvenes con este perfil, situación que obviamente sobrepasa a los profesionales que en ellos trabajan y por otro lado, desnaturalizan los objetivos de intervención con respecto a los demás beneficiarios de tales programas.-</i></p> <p><i>La correcta interpretación para dar contenido al Interés Superior de los niños, dice relación con generar programas especiales, con lo que, además, se cumple la normativa legal, y no como lo ha implementado, en esta Xía Región al menos, el Servicio Nacional de Menores, con un simple aumento de cupos de los programas ya existentes.-</i></p>	<p>Dificultades por normas legales</p>
<p>Copias de audiencias reservadas con niños, niñas y adolescentes.</p>	<p><i>En cuanto a las solicitudes de conferir copia de audio de audiencias reservadas que se realizan con niños, niñas y adolescentes el legislador no contempla expresamente un criterio para tales efectos.</i></p> <p><i>Así entonces, atendiendo al derecho contenido en el artículo 16 de la Ley 19.968, consistente en ser oído por el Juez, y el interés superior del niño, habrá de tenerse en especial consideración la reserva y confidencialidad de la misma por cuanto, de permitirse que las partes tengan acceso a tales registros de audio, podrían derivarse nefastas consecuencias para el menor, razón por la cual se ha optado por no entregar dichas copias.-</i></p> <p><i>Creemos que a objeto de evitar disparidad de criterios a nivel de Tribunales, sería aconsejable una consagración normativa en uno u otro sentido.-.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>
<p>Procedimiento contravencional ante los Tribunales de Familia.</p>	<p><i>El Párrafo 4° del Título IV de la Ley 19.968, en sus artículos 102 A y siguientes, establece el procedimiento aplicable en casos de infracciones de Ley cometidas por adolescentes mayores de 14 años.-</i></p> <p><i>Sin embargo, este procedimiento contraviene en más de un pasaje las garantías del debido proceso consagradas a nivel Constitucional y por los Tratados Internacionales suscritos por Chile, pudiendo citar por vía ejemplar, que no es obligatorio que en estos procedimientos el adolescente cuente con asesoría Letrada y la manifiesta inconsistencia entre lo prescrito en los artículos 102 G y 102 H, en cuanto por una parte se le reconoce al adolescente la posibilidad de guardar silencio y por otro lado, que no obstante el Juez puede interrogarlo sobre los hechos materia del requerimiento.- Esta constatación no es una cuestión baladí, toda vez que se trata de un procedimiento que busca aplicar sanciones de naturaleza penal, las que de ser incumplidas, acarrearán la comisión de un ilícito perseguible de oficio por la fiscalía correspondiente, a saber, desacato, sin perjuicio además que por lo establecido en el artículo 102 K, la ausencia del derecho a la Apelación lesiona aún más y cuestiona seriamente, la calidad de debido proceso de este procedimiento, en razón de la imposibilidad del adolescente de contar con la revisión de su sentencia por un Tribunal de Alzada.-</i></p> <p><i>Sobre el particular, huelga recordar que el párrafo 2 del artículo 40 de la Convención contiene una importante lista de derechos y garantías, que tienen por objeto garantizar que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes reciba un trato justo y sea sometido a un juicio imparcial. La mayoría de esas garantías también se reconocen en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que por cierto, no se contienen en su totalidad en el procedimiento de la Ley 19.968.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>

	Regulación prueba testimonial y declaración de parte.	<i>La Ley N° 19.968, no establece normas sobre la declaración de parte o de testigos en el proceso, ya sea de sus examen o contra examen por lo que sería conveniente que el legislador estableciera las normas o directrices sobre esta materia, en atención al especial materia de que se trata la problemática de familia y, no recurrir, vía interpretativa, a las normas existentes sobre estas actuaciones de prueba en el Código Procesal Penal.</i>	Vacío legal
	Artículo 64 de la Ley 19.947 que establece la nueva Ley de Matrimonio Civil en relación con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<i>En los hechos cuando las partes no han ejercido la acción de compensación económica ni en la demanda ni por vía reconvenzional y el juez, cumpliendo con lo ordenado en el artículo 64 ya citado, les informa en la audiencia preparatoria, sobre el derecho que les asiste a solicitar dicha compensación y éstas manifiestan su deseo de ejercer tal acción, parece, desde la casuística una abierta contradicción con la norma procesal, del artículo 58 de la ley 19.968, que establece las oportunidades para ejercerla, hipótesis en la cual, el deber de información que pesa sobre el juez de familia, ya aludido, se referiría a un derecho que estaría precluido.</i>	Vacío legal
	Artículo 61 de la Ley 19.947 que establece la nueva Ley de Matrimonio Civil.	<i>Se ha advertido como dificultad, en materia de compensación económica, contemplada en el Art. 61 de la Ley 19.947, la falta de herramientas legales que permitan al Juez de Familia efectuar una eficaz investigación del patrimonio del demandado. La legislación vigente en materia tributaria, sólo permite requerir información al Servicio de Impuestos Internos en materia de alimentos. Motivo por el cual, dicho servicio se ha negado de manera persistente a entregar información de contribuyente fuera de dicho contexto.</i>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 22 de la Ley 19.947 que establece la nueva Ley de Matrimonio Civil en relación con el artículo 25 del mismo cuerpo legal.	<i>Para acreditar el cese de la convivencia en el divorcio de común acuerdo, la ley exige, entre otras opciones, la presentación del acuerdo completo y suficiente regulado en el artículo 22 de la Ley 19.947. En relación con este acuerdo, que se contiene en una escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario público, es frecuente que se incluya una cláusula de estilo denominada de "cese de convivencia", estableciéndose por los otorgantes una fecha distinta a la del instrumento, surgiendo entonces la pregunta acerca de cuál de las dos fechas debe primar para comenzar a contar el plazo de cese de convivencia.</i>	Duda de interpretación
PUNTA ARENAS	Artículo 111 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.	<i>En cuanto a los Centros de mediación competentes a los que deben concurrir las partes cuando estas tienen domicilio diverso, se advierte ausencia de norma legal que regule la materia. Si bien las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular, deben someterse a un proceso de mediación previo a la interposición de la demanda, no es menos cierto que no existe norma alguna que indique a qué Centro de Mediación se debe concurrir cuando las partes viven en jurisdicciones diversas, limitándose el artículo 111 de la ley 19.968 a indicar que si la mediación se frustra se levantará un acta la cual se remitirá al tribunal correspondiente, así, en la hipótesis planteada, ni el demandante ni el demandado viajarán a la ciudad de la contraria para concretar la cita con el mediador, dándose por frustrada, lo que sin duda desvirtúa la finalidad de la mediación decantando ésta en un mero trámite o formalidad.</i>	Vacío legal
	Artículo 12 de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.	<i>La norma establece el registro especial de sanciones y medidas accesorias, el que debe ser llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de las personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada como autores de violencia intrafamiliar. La duda surge en cuanto a si es posible obtener la eliminación de las anotaciones que constan en el registro especial de violencia intrafamiliar y, en su caso, cuál sería el procedimiento para ello, pues el Decreto Ley N° 409 del Ministerio de Justicia de fecha 18 de agosto de 1932, sólo establece un procedimiento para eliminar las anotaciones prontuariales provenientes de crímenes o simples delitos.</i>	Duda de interpretación (solicitud de reforma legal)

		<p>Se hacen presente la afectación del interés superior del niño y en especial de su derecho a ser oído por recientes modificaciones legales, produciendo una incoherencia sistémica que atenta contra las convenciones internacionales.</p> <p>La legislación civil no respeta el principio de que el interés superior del niño debe ser tenido en cuenta como consideración principal en la resolución de los asuntos de familia, porque, por ejemplo, el artículo 85 de la Ley 19.947 sólo recoge el inciso primero del artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, por lo que el principio señalado carece de la resonancia legal adecuada.</p> <p>Más contradictoria y confusa es la modificación legal impuesta por la Ley 20.680 en materia de cuidado personal y relación directa y regular, porque el artículo 225-2 establece el derecho a ser oído del menor como un elemento más entre todos los que el juez debe tener en consideración al resolver, olvidando el estándar de consideración principal; y porque el artículo 299 degrada el mandato de respetar el interés superior del niño a una mera recomendación.</p> <p>A su vez, el artículo 19 de la Ley 19.968 entrega la representación legal de los niños a sus padres, adoptantes, tutores o curadores y no obstante entrega su defensa en juicio a la Corporación de Asistencia Judicial, la que de acuerdo con el artículo 5 de la Convención debería corresponder a sus padres o tutores.</p> <p>Estas dificultades están significando que se atente contra el espíritu de la Convención y del respeto del verdadero derecho procesal que le asiste al niño.</p>	Dificultades por normas legales
	JUZGADO DE FAMILIA DE PUERTO MONTT	<p>Artículo 64 de la Ley 19.947 que establece Nueva Ley de Matrimonio Civil en relación con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia.</p> <p>El artículo 64 de la Ley 19.947 establece que si la compensación económica no se solicitó en la demanda, el juez deberá informar a los cónyuges de la existencia de este derecho en la audiencia preparatoria.</p> <p>No obstante, a estas alturas ya está delimitada la demanda sin poder modificarse al haberse notificado al demandado, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil supletoriamente aplicables, y también ya venció el plazo para contestar la demanda y demandar reconvenzionalmente conforme al artículo 58 de la Ley 19.968.</p> <p>En consecuencia, la duda que surge es sobre si el juez puede o no brindar a las partes la posibilidad de demandar o reconvenir la compensación económica en la audiencia preparatoria.</p>	Vacío legal

MATERIA	CORTE DE APELACIONES	ARTÍCULO	DUDA O DIFICULTAD	ID
PENAL Y PROCESAL PENAL	ARICA	Artículo 19 de la Ley N° 20.000 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.	<i>En el caso de la norma contenida en el artículo N° 19 de la Ley N° 20.000, que contempla una serie de circunstancias agravantes privilegiadas, cuyo efecto en la determinación de la pena consiste, de acuerdo a su inciso primero, en un aumento de un grado de la misma, la duda explicitada por los señores Ministros dice relación con la forma de efectuar dicho aumento cuando la sanción comprende dos o mas grados, esto es, en cuyo caso la elevación podría efectuarse desde el grado mas alto de la sanción de que se trate o aumentando la escala completa.</i>	Duda de interpretación
		Artículo 52 de la Ley N° 20.000 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.	<i>Otra situación que ha generado dudas en la aplicación de la aludida Ley [20.000] dice relación con el ámbito de vigencia del artículo N° 52, que contempla la sustitución de la pena pecuniaria de multa por una de reclusión, en el evento de que el sentenciado no pague dicha multa, bajo parámetros distintos a los señalados en el artículo 49 del Código Penal, ello en atención a que el precepto en cuestión se encuentra ubicado en el Título IV de la Ley N° 20.000 aplicable únicamente a las faltas.</i>	Duda de interpretación
	IQUIQUE	Artículo 7 de la Ley 20.588 que establece el indulto general.	<i>Determinación del tribunal competente respecto a la figura contenida en el artículo 7 inciso segundo de la ley 20.588, de 1 de junio de 2012, que establece el quebrantamiento una vez concedido el indulto general de esa ley, atendido que dicha norma no establece criterios para determinar cómo se produce el mismo, tampoco acerca de la competencia para declararlo, ni la discrecionalidad de su aplicación.</i>	Duda de interpretación
		Artículo 469 del Código Procesal Penal y artículo 46 de la Ley 20.000.	<p><i>Se ha advertido la existencia de un vacío legal en nuestro sistema de ejecución patrimonial de la sentencia penal, tratándose del comiso de bienes inmuebles.</i></p> <p><i>Efectivamente, tratándose de los bienes inmuebles decomisados no existe norma legal que permita concretar la pena de comiso sobre los mismos, de acuerdo al sistema registral de la propiedad que rige en Chile. Esto por cuanto para que la pena de comiso de materialice, surtiendo sus efectos en el caso de los bienes inmuebles, se requiere un título traslativo de dominio y que dicho título se inscriba ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo.</i></p> <p><i>Al respecto la Dirección General de Crédito Prendario ha sostenido que los inmuebles decomisados deben inscribirse a nombre del Estado para poder cumplir con el mandato legal del artículo 469 del Código Procesal Penal (también sobre la materia el artículo 46 de la Ley N° 20.000). Sin embargo, dicha norma, sólo preceptúa que los bienes decomisados se pondrán a su disposición para que proceda a su enajenación en pública subasta, pero en ningún momento establece que los bienes pasen a nombre del Fisco para luego ser enajenados.</i></p> <p><i>Tampoco existe en la materia una norma similar al artículo 20 del Decreto Ley N° 2.186, Ley Orgánica de Expropiaciones, que preceptúa que el dominio del bien queda radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del Estado. Ello siempre considerando que el modo de adquirir el dominio por parte del Fisco sea la Ley.</i></p> <p><i>Se requiere en la materia una regulación expresa con el objeto de salvar no sólo las cuestiones formales sino que también sustanciales, atendido el sistema de posesión inscrita y registral chileno, además de resolver eventuales derechos de terceros que podrían existir respecto de los bienes decomisados, como por ejemplo acreedores hipotecarios.</i></p>	Vacío legal

LA SERENA

<p>Artículo 264 letra e) del Código Procesal Penal.</p>	<p><i>La dificultad se suscita en cuanto a la oportunidad para resolver dicha alegación en el marco del juicio oral, toda vez que de resolverse una formulada y al inicio de la audiencia, acogiéndose, importa que no se lleve a cabo el juicio oral propiamente tal, alegándose por las partes la vulneración a la garantía del artículo 19 N° 3, ya que se obstaculiza el derecho consagrado en dicha norma de acceder a una igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.</i></p> <p><i>Por otra parte, de pronunciarse el Tribunal en términos positivos, acogiendo la excepción y optando por diferir la dictación del correspondiente procedimiento (consecuencia necesaria de declararse la extinción de la responsabilidad penal) impide acceder a la revisión de dicha resolución por parte de un tribunal superior, toda vez que transforma en una resolución que pone término al juicio o hace imposible su continuación en una decisión de única instancia sin posibilidad de ser recurrida por la vía de apelación conforme norma expresa contenida en el artículo 364 del Código Procesal Penal [al ser dictada por un tribunal oral en lo penal] o del recurso de nulidad que se contempla en el artículo 372 del citado código, perturbando gravemente el ejercicio del derecho de defensa.</i></p> <p><i>Además, la dificultad se suscita por cuanto de interpretarse por las partes y acogerse por el Tribunal, que la extinción de la responsabilidad del acusado constituye una alegación de fondo, implica que ha de resolverse por el Tribunal a quo en la sentencia definitiva, aun planteada al inicio del juicio como excepción de previo y especial pronunciamiento, viéndose afectada su apreciación si el tribunal falla inmediatamente sin entrar el juicio oral propiamente tal, lo que por supuesto lleva a los Tribunales a actuar de diversa manera y no bajo un criterio uniforme, según la interpretación que se dé al caso en particular.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>
<p>Artículo 364 del Código Procesal Penal.</p>	<p><i>La norma del artículo 364 del Código Procesal Penal, ha llevado reiteradamente a los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a negar el recurso de apelación establecido en el artículo 37 de la Ley 18.216, incorporado por la Ley N° 20.603, al estimar que aquella norma establece como regla general, sin excepción, que las resoluciones de un Tribunal Oral son inapelables, unido a la circunstancia de entender que, al no contemplar el artículo 63 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales una norma que otorgue competencia a las Cortes de Apelaciones para conocer en segunda instancia de las resoluciones dictadas por dichos tribunales, se hace improcedente el recurso de apelación.</i></p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>Artículo 112 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 399 bis del mismo cuerpo legal.</p>	<p><i>Los jueces de garantía en reiteradas resoluciones han procedido a declarar la inadmisibilidad de las querellas deducidas por las víctimas al estimarlas extemporáneas, toda vez que sostienen que el requerimiento es el equivalente a la acusación fiscal y en tal virtud, una vez presentado se extingue el plazo para deducirla, ello en razón de que la misma puede presentarse en cualquier momento, mientras el fiscal no declare cerrada la investigación. No obstante, dicha actuación, no se verifica en el procedimiento simplificado.</i></p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>Artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal.</p>	<p><i>A propósito del incumplimiento de los acuerdos reparatorios, el Código Procesal Penal, no establece expresamente la facultad de dejar sin efecto el referido acuerdo, en el evento que no se dé cumplimiento [a] tal; situación contraria ocurre a propósito de la suspensión condicional, ya que el legislador, sí lo posibilita.</i></p>	<p>Vacío legal</p>
<p>Artículo 186 del Código Procesal Penal.</p>	<p><i>Si bien el artículo 186 del Código Procesal Penal establece la posibilidad para el Tribunal de fijarle un plazo al Ministerio Público, para formalizar la investigación, pero no establece cuál es la sanción a imponer en el evento de incumplimiento.</i></p>	<p>Vacío legal</p>

SAN MIGUEL	Ausencia de norma sobre orden de cumplimiento de castigos en la Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.	<i>En la mencionada normativa y aun cuando contempla sanciones de distinta naturaleza, no se precisa el orden de cumplimiento de diversos castigos respecto de un mismo imputado, debiendo entonces recogerse la norma general consagrada en el Código Penal.</i>	Solicitud de reforma legal
VALPARAÍSO	Artículo 276 del Código Procesal Penal.	<i>Artículo 276 del Código Procesal Penal, referida a la exclusión de pruebas para el juicio oral, que provienen de actuaciones o diligencias que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales, en el caso de que durante la investigación efectuada por el Ministerio Público, no se le hubiese tomado declaración al funcionario aprehensor y se pretenda incluir su testimonio durante el juicio oral, sin que la defensa tenga la posibilidad de contrastar dichas declaraciones.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 458 del Código Procesal Penal.	<i>Artículo 458 del Código Procesal Penal, específicamente referido a la situación de demencia de un imputado, en relación a los antecedentes necesarios que permiten presumir la inimputabilidad por enajenación mental y si dicha norma, además, resulta aplicable una vez que se ha dictado veredicto en la causa.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 43 de la Ley N° 20.000 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.	<i>Artículo 43 de la Ley n° 20.000, que sustituye la Ley n° 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, relativo a la exigencia de la determinación de la pureza de la droga, respecto al protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada, practicado por el Servicio de Salud.</i>	Duda de interpretación
	Recurso de amparo constitucional.	<i>La entrada en vigencia de la reforma procesal penal, al derogar el antiguo Código de Procedimiento Penal, dejó sin reglamentación la tramitación del recurso de amparo, por lo que se estima necesario la dictación de un auto acordado que regule dicha materia.</i>	Solicitud de regulación normativa

RANCAGUA

<p>Artículo 12 N° 16 del Código Penal.</p>	<p><i>Aplicación de la agravante del artículo 12 N° 16 del Código Penal, de reincidencia específica, respecto de los acusados adultos que han sido condenados como adolescentes, de conformidad a la Ley 20.084, por cuanto se ha sostenido por alguna parte de la jurisprudencia que lo anterior pugna con las reglas de Beijing, que impedirían considerar las condenas en la minoría de edad a un imputado adulto, en tanto otra parte de la jurisprudencia ha planteado la plena aplicación de dicha agravante, tanto para los adultos como a los adolescentes, en razón de que las referidas reglas no constituyen un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentre vigente, postura que fue recientemente sostenida por ese Excmo. Tribunal en el Rol 7364-2012 en recurso de unificación de jurisprudencia.</i></p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>Artículo 468 del Código Procesal Penal en relación con artículos 12 bis, 17 bis y 23 de la Ley 18.216 que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.</p>	<p><i>La falta de armonía en la regulación legal respecto del tribunal encargado de efectuar los controles periódicos que impone la Ley 18.216, modificada por la Ley 20.603, ya que a pesar de que de acuerdo al artículo 468 del Código Procesal Penal el tribunal encargado de la ejecución de la sentencia es el Juzgado de Garantía, en la ley en comento se encomienda al Tribunal que dictó la sentencia, por ejemplo al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que lleve a cabo audiencias para controlar el cumplimiento de ciertas medidas alternativas, como en el caso de los artículos 12 bis, 17 bis y 23 de la referida normativa, a lo que se suma que en la situación del artículo 23 nada se dice respecto del tribunal competente.</i></p>	<p>Dificultades por normas legales</p>
<p>Ley 20.580 que aumenta las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol.</p>	<p><i>Dificultades en la aplicación de la ley 20.580, que aumentó sanciones por delito de manejo en Estado de Ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol, ya que con su implementación se generó debate y discusión en relación a la procedencia y contenido de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento y particularmente en cuanto a su incidencia en el mayor tiempo de observación aplicado, en estos casos, por la imposición de la condición relativa a la suspensión de la licencia de conducir. El aumento de la penalidad contenida en esta ley entrabó en las audiencias tanto la concreción de las salidas alternativas, como asimismo la posibilidad de poner término inmediato a las causas por sentencia, previa admisión de responsabilidad.</i></p>	<p>Dificultades por normas legales</p>
<p>Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.</p>	<p><i>Respecto de vacíos observados, se puede señalar de la Ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, que no existe una norma que dé solución en casos de incumplimiento no informados oportunamente al Tribunal y en los que no se hubiere aplicado la normativa sobre quebrantamiento y que permita dar por cumplida aquellas sanciones de menor entidad (por ej. Reparación del daño, servicios a favor de la comunidad), aplicadas a menores cuando éstos ya han alcanzado la mayoría de edad y luego están sujetos al Régimen Penal aplicable a los adultos, produciéndose situaciones en que una misma persona cumple penas como adulto y asimismo tiene pendiente otras sanciones de aquellas no privativas ni restrictivas del libertad, que le fueron aplicadas como menor de edad.</i></p> <p><i>En relación a esta Ley, tampoco hay norma expresa que se refiera a la posibilidad de acumulación de las sanciones de aquellas de menor entidad, como una alternativa a la aplicación inmediata de la sanción por quebrantamiento.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>

	<p>Artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal.</p>	<p><i>Se mantiene la necesidad de una modificación legal que aclare si el ejercicio de la facultad del fiscal de no perseverar en la investigación, art. [2]48 letra c) del Código de Procedimiento Penal, puede ejercerse aun sin formalización de la investigación, puesto que en las causas judicializadas por otra vía, no podrían cerrarse sino por un sobreseimiento definitivo.</i></p> <p><i>En muchos casos, esta última no es una solución viable, pues existen antecedentes de delito, pero no lo suficiente para formalizar. De lo contrario el imputado queda sujeto a una investigación formalmente abierta, mientras no prescriba, pese a que no se estén desarrollando diligencias.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>
	<p>Recurso de amparo constitucional.</p>	<p><i>La ausencia de una regulación concreta de la tramitación de la acción constitucional de amparo, para establecer los plazos para fallarla e interponer recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones.</i></p>	<p>Solicitud de regulación normativa</p>
	<p>Artículo 186 del Código Procesal Penal.</p>	<p><i>La aparente infructuosa facultad que el artículo 186 del Código Procesal Penal le otorga al juez de garantía, de fijar un plazo para que el ministerio público formalice la investigación, si la inobservancia de tal decisión no produce efecto, dado que conforme al artículo 230 del mismo Código, tal actuación administrativa puede efectuarse cuando se estime oportuno.</i></p>	<p>Vacío legal</p>
<p>TALCA</p>	<p>Artículo 373 b) y 374 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 385 y 386 del mismo cuerpo legal.</p>	<p><i>La inconveniencia presentada cuando el Ministerio Público o el querellante particular recurren de nulidad, fundados en la causal establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en las situaciones inversas a las contempladas en el artículo 385 del mismo cuerpo jurídico, pues parece del todo innecesario invalidar el juicio oral y la sentencia, bastando la invalidación de ésta y la dictación de una de reemplazo.</i></p> <p><i>Las causales del artículo 374 del código antes citado, que aluden a la ocurrencia del vicio en la dictación de la sentencia, carece de sentido lógico que en virtud de lo dispuesto en el artículo 386 de dicho cuerpo normativo, se invalide tanto el juicio y el procedimiento, debiendo la nulidad sólo alcanzar a la sentencia definitiva.</i></p> <p><i>Otro tanto sucede tratándose de la causal de nulidad del artículo 374 letra g) del citado Código, en cuyo caso también bastaría con que se dictara sentencia de reemplazo solamente.</i></p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>

	Recurso de amparo	<i>La acción o recurso de amparo es una materia penal y si se estima que es un recurso, deberá procederse a su vista sin relación, pero como no es de los recursos regulados en el Libro III del Código Procesal Penal, se conoce, en la práctica, en relación.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 369 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 52 del mismo cuerpo legal y el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil.	<i>El inciso 2° del artículo 369 del Código Procesal Penal señala que el recurso de hecho se fallará en cuenta. De ello se colige que el espíritu del legislador fue que se fallara en tal forma. En consecuencia, no procede se resuelva previa vista de la causa por cuanto no resulta aplicable supletoriamente, en virtud del artículo 52 del Código citado, el inciso primero del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, en que procede fallar previa vista de la causa si alguna de las partes pide alegatos dentro del plazo para comparecer en segunda instancia, pues tal norma es aplicable sólo al recurso de apelación, cuyo no es el caso en referencia.</i>	Duda de interpretación
CHILLÁN	Artículo 348 del Código Procesal Penal.	<i>En lo que respecta a los cumplimientos de penas privativas de libertad, no existe norma expresa que considere el abono del tiempo de privación de libertad que un imputado tuvo en una causa respecto de otra en la que fuere condenado. Los tribunales han fallado en uno u otro sentido, existiendo también en ocasiones una confusión con la figura de unificación de penas y sus fundamentos. Se plantean dudas respecto de los requisitos generales, del límite restricción o imposibilidad de acceder a la solicitud.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 466 y siguientes del Código Procesal Penal.	<i>Se presente al problema en cuanto a qué tribunal es competente frente [a] conflictos presentados durante la ejecución de las penas privativas de libertad. Como por ejemplo, en cuanto a la declaración de prescripción de la pena, ¿es competente el Juez de Garantía o el Tribunal Oral en lo Penal?.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 1 de la Ley N° 18.216 que establece penas substitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad (Modificado por la Ley N° 20.603).	<i>En cuanto a la interpretación del inciso final del artículo 1 de la Ley 20.603, en particular, respecto de la palabra "cumplida", existiendo duda si debe estarse a la fecha de la comisión del anterior delito, a la fecha en que la sentencia se encuentre ejecutoriada o a la fecha de cumplimiento de la pena.</i>	Duda de interpretación
CONCEPCIÓN	Artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal.	<i>Tratándose de los acuerdos reparatorios, al no existir norma que establezca la facultad de revocación ante incumplimiento, se plantea la duda respecto a si es posible aplicar por analogía la revocación de la suspensión condicional del procedimiento.</i>	Vacío legal

	Artículo 348 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.	<i>Interpretación del artículo 348 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, respecto a si es posible imputar tiempos de privación de libertad de otras causas en la que se juzga actualmente.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 12 de la Ley Nº 18.216 que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad en relación con el artículo 348 del Código Procesal Penal.	<i>Respecto a la prestación de servicios [a] la comunidad cuando el condenado tiene días de abono por privación de libertad ¿es posible hacer una compensación de la primera con el tiempo de la segunda?</i>	Duda de interpretación
TEMUCO	Artículo 134 del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 388 y 392 del mismo cuerpo legal.	<i>"En casos de ser detenida una persona cometiendo una falta en situación de flagrancia: El Ministerio Público, al requerirlo en audiencia, debe hacerlo conforme a las normas del procedimiento simplificado o del monitorio."</i>	Duda de interpretación
	Artículo 149 del Código Procesal Penal en relación con los artículos 18 y 281 del mismo cuerpo legal.	<i>"Qué tribunal es competente para conceder el recurso de apelación deducido en contra de la resolución del Juez de Garantía que se pronuncia sobre medidas cautelares, cuando dicha resolución ha sido dictada en audiencia preparatoria de juicio oral y las partes han renunciado a los plazos de impugnación del auto de apertura, razón por la que el mismo es inmediatamente remitido al Tribunal Oral de Juicio Oral en lo Penal que corresponda."</i>	Duda de interpretación
	Artículo 241 del Código Procesal Penal en relación con el Convenio 169 de la OIT.	<i>"Pertinencia de acuerdos reparatorios entre etnias indígenas en caso del delito de violencia intrafamiliar, de conformidad al Convenio 169 de la OIT"</i>	Duda de interpretación
	Recurso de amparo constitucional.	<i>"Se estima necesario regular normativamente la tramitación del recurso de amparo constitucional."</i>	Solicitud de regulación normativa
VALDIVIA	Artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal.	Los artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal no abordan lo que sucede con el incumplimiento del acuerdo reparatorio, por lo que son posible distintas soluciones.	Vacío legal

COYHAIQUE	Artículo 74 del Código Orgánico de Tribunales.	<p>Ocurre que los artículos 19 y 74 del Código Orgánico de Tribunales, dicen relación con la dispersión de votos, en el acuerdo que toman las Cortes de Apelaciones en causas criminales, mas no respecto del empate de votos, problema que se plantea en el caso de Cortes de Apelaciones integradas por cuatro Ministros y que cuenten con una sola Sala.</p> <p>El antiguo texto del artículo 74 del Código Orgánico de Tribunales, modificado por la Ley N° 19.708, regulaba la situación de producirse empate de votos en causas criminales, el que fue derogado por la citada norma, adecuándolo a la situación y toma de acuerdos de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, consignada en el artículo 19 del Código Orgánico</p> <p>En consecuencia, la duda estaría dada por cuál debiera ser la solución en caso de empate en las votaciones. o de Tribunales, Tribunal en el que lógicamente no se produce empate de votos, atendida su integración, lo que no acontece en este Ilustrísimo Tribunal.</p>	Duda de interpretación
	Artículo 385 del Código Procesal Penal.	<p>El artículo 385 del Código Procesal Penal sólo permite dictar sentencia de reemplazo cuando el fallo anulado hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere. En otras palabras, sólo permite dictar sentencia de reemplazo cuando ello redunde en la absolución del imputado o la aplicación de penas menores.</p> <p>No obstante, debiese permitirse también la dictación de sentencia de reemplazo para la aplicación de penas superiores, ya que en la actualidad se realiza una nueva audiencia de juicio oral con el sólo objeto de zanjar una cuestión jurídica que muchas veces termina fallada en el mismo sentido original en virtud de la independencia del juez de instancia, no avizorándose el fundamento que impida a las Cortes decidir en este punto, más aún cuando ello aparejaría un ahorro de recursos y tiempo.</p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 281 del Código Procesal Penal.	<p>En relación a la fecha de la audiencia de juicio oral, el artículo 281 del Código Procesal Penal señala en su inciso 3° que deberá tener lugar no antes de quince ni después de sesenta días desde la notificación del auto de apertura de juicio oral, pero en el inciso 1° obliga al Juez de Garantía a remitirlo al tribunal de juicio oral en lo penal dentro de las 48 horas siguientes al momento en que quedare firme, pudiendo existir diferencias considerables entre la notificación del auto de apertura y el momento en que quede ejecutoriado, por lo que pareciera que el plazo consignado en el inciso 3° de la norma citada, debiera computarse a partir del momento en que el auto de apertura de juicio oral ingresa al tribunal de juicio oral en lo penal, para evitar cualquier confusión y así darle más tiempo a este último tribunal para agendar los juicios.</p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 39 de la Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.	<p>En relación a la fecha de la audiencia de juicio oral, en que uno de los acusados es un adolescente, el artículo 39 de la Ley N°20.084 establece que deberá tener lugar no antes de los quince ni después de los treinta días siguientes a la notificación del auto de apertura del juicio oral, plazo excesivamente breve si se considera que ya el Código Procesal Penal establece plazos acotados y que aseguran que el proceso se lleve a efecto de manera expedita, situación que en muchos casos obliga a agendar juicios entremedio de otras audiencias ya fijadas, con los consecuentes problemas para el tribunal e intervinientes, por lo que pareciere prudente que la Ley debiese establecer la posibilidad de fijar en los mismos plazos establecidos para los adultos, o a lo menos obligar a aplicar los plazos más breves únicamente para aquellos adolescentes que se encuentran con internación provisoria.</p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 33 del Código Procesal Penal.	<p>El artículo 33 del Código Procesal Penal que regula las citaciones judiciales, no precisa cuál es la notificación que permitirá hacer efectivos los apercibimientos para el evento de no concurrir el testigo o acusado a la audiencia de Juicio Oral, lo que ha traído dificultades, pues no resulta claro que la notificación por cédula asegure que el testigo o acusado tomó conocimiento de las consecuencias que su inasistencia injustificada podría traerle aparejado, proponiéndose para tal efecto que se permita notificar a Carabineros, Policía de Investigaciones y peritos que trabajen en instituciones públicas, personalmente o por cédula, y testigos civiles, de manera personal.</p>	Solicitud de reforma legal

Artículo 248 del Código Procesal Penal.	<i>En relación con la actuación administrativa del Ministerio Público, en lo que se refiere al cierre de la investigación, ésta decisión no debe estar ajena a la intervención judicial, y sólo con la providencia del Juez de Garantía, debidamente notificada a los intervinientes, deberían correr los plazos asociados a tal actuación.</i>	Solicitud de reforma legal
Artículo 191 del Código Procesal Penal.	<i>En relación a la prueba anticipada, admitida en los casos, a que se refiere el artículo referido en su inciso segundo, parece más idóneo que la recepción de la misma se haga por el mismo tribunal que conocerá posteriormente del Juicio Oral, esto es, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.</i>	Solicitud de reforma legal
Creación de un Juez de Ejecución Penal.	<i>La necesidad que se establezca el mecanismo independiente del Juez de Control de Ejecución de Penas, con competencia completa y exclusiva, respecto tanto de la ejecución de penas privativas o restrictivas de libertad, de administración de penas sustitutivas de la ley 18.216, y de la ley 20.084.</i>	Solicitud de reforma legal
Ley 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.	<i>En este caso, la inclusión de la huella genética en el período de enjuiciamiento respecto de cualquier imputado, en tanto no sea condenado por sentencia firme, parece contradictorio con la presunción de inocencia.</i>	Solicitud de reforma legal
Artículo 406 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 370 letra a) del mismo cuerpo legal.	<i>Se plantea la duda en cuanto a si la resolución que no da lugar a la aplicación del procedimiento abreviado es o no apelable. Se han planteado diversas interpretaciones, el Juzgado de Letras de Porvenir ha estimado que es inapelable, pues la referida resolución no pone término al juicio ni hace imposible su continuación, toda vez que, la causa en tal circunstancia se sigue sustanciando conforme al procedimiento ordinario establecido en el Libro Segundo del Código Procesal Penal.</i>	Duda de interpretación
Artículo 49 del Código Penal (modificado por la Ley 20.587 que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios).	<i>Surgen dos interrogantes en relación a la norma, la primera dice relación con la oportunidad en la que se requerirá al sentenciado que manifieste su voluntad o acuerdo para convertir la multa por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, esto es, al momento de vencer el plazo conferido para el pago de la pena pecuniaria impuesta o basta que se le apereciba a manifestar su voluntad dentro de un plazo determinado en la sentencia condenatoria; en tanto que la segunda duda, se refiere a si basta que el sentenciado nada diga en la oportunidad conferida, para presumir su negativa en orden a efectuar la sanción sustitutiva, o si se requiere forzosamente que manifieste su oposición a esta sustitución y opte por la reclusión para solventar el pago de multa.</i>	Duda de interpretación
Artículo 4 de la Ley 18.216 que establece	<i>El artículo 4o inciso final de la ley No 18.216, modificada por la ley N° 20.603, dispone: "Con todo, no procederá la remisión condicional como pena sustitutiva si el sentenciado fuere condenado por aquellos ilícitos previstos en los artículos 15, letra b), o 15 bis, letra b), debiendo el tribunal, en estos casos, imponer la pena de reclusión parcial, libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, si procediere", esto es, los delitos contemplados en el Artículo 4° de la Ley N° 20.000, o en los incisos segundo y tercero del artículo 196 de la Ley de Tránsito, o bien de ciertos delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar; en todo caso cuando la pena a imponer fuere</i>	Duda de interpretación

PUNTA ARENAS	penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.	<p>superior a quinientos cuarenta y un días.</p> <p>Sin embargo, existen sentencias donde se ha concedido la pena sustitutiva de remisión condicional tratándose de los delitos indicados, fundado en que la remisión del artículo 4o al artículo 15 en comento, no es solo nominal en cuanto a los delitos, sino que además se refiere al límite de pena indicado en dicha norma; de manera que si se condena por un delito de micro tráfico a una pena inferior a quinientos cuarenta y un días, debiese concederse la pena sustitutiva.</p>	Interpretación
	Artículo 17 de la Ley 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.	<p>Dentro de la nómina de delitos que deben ser incluidos en su letra C) se refiere la elaboración o tráfico ilícito de estupefacientes o delito terrorista. No es claro si se incluyen a los delitos del artículo 4° de la ley 20.000 cuando se menciona tráfico de estupefacientes, y los tribunales han sido ambiguos al resolver, lo que genera reiteradas peticiones de pronunciamiento de Gendarmería en orden a su inclusión o no en el referido registro.</p>	Duda de interpretación
	Artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.	<p>Existe ambigüedad respecto de la aplicación del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, en base a que se producen juzgamientos cercanos en el tiempo por diversos delitos, en diversos tribunales, a un mismo imputado, sin coordinación respecto a aquel de ellos, que, por dictar la última sentencia debe establecer el orden en que cumplirá las respectivas sanciones y los abonos de tiempo privado de libertad.</p>	Dificultades por normas legales
	Artículo 53 de la Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, en relación con el artículo 26 del mismo cuerpo legal.	<p>En la aplicación de estas normas se da la dificultad que ha denunciado el Defensor penal juvenil en estrados (Rol 169-2014 RPP CA Punta Arenas, RIT O-504-2012 - Delito de homicidio).</p> <p>Hace ver que de acuerdo a las reglas generales y al régimen penitenciario de adulto, el joven podría participar en el proceso de libertad condicional, si cumple con el requisito del tiempo mínimo y la conducta. Muchas veces se discute "qué más se puede hacer intramuros". Sin embargo, por el hecho de estar bajo el alero de la Ley 20.084 no se le permite optar a estos procesos, es decir, la situación de los jóvenes que cumplen bajo esta ley penal especial, es más desfavorable que la situación de un adulto en circunstancias similares, produciéndose la incongruencia que un adulto pueda salir en libertad antes que un joven condenado como adolescente, sólo por el hecho de cumplir su sanción bajo el manto de la ley especial, cuando, por el contrario, lo que subyace en ella, es que un infractor siempre debe estar en mejor condición que un adulto, según puede extraerse del artículo 26, inciso segundo, "en ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza".</p>	Solicitud de reforma legal

MATERIA	CORTE DE APELACIONES	ARTÍCULO	DUDA O DIFICULTAD	ID
LABORAL Y PROCESAL LABORAL	IQUIQUE	Artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo.	<i>Mejorar los derechos de las partes al aplicar el artículo 453 N° 1 inciso sexto del Código del Trabajo, en razón de que dicha norma solo concede apelación contra resolución que resuelve algunas excepciones y sólo cuando las mismas son acogidas, generando problemas con la defensa de derechos.</i>	Solicitud de reforma legal
		Artículo 454 N° 2 del Código del Trabajo.	<i>Modificar el contenido del artículo 454 N° 2 del Código del Trabajo, a fin de que se establezca que la impugnación de la prueba documental sólo se realice en la audiencia preparatoria suprimiéndose la posibilidad de efectuarla en la audiencia de juicio.</i>	Solicitud de reforma legal
		Artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo.	<i>En el orden de recepción de pruebas, surge una dificultad en la audiencia de juicio, en los casos en que falte un determinado oficio solicitado oportunamente, debiendo fijarse una nueva fecha para su incorporación, al tenor del artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo, produciéndose una situación no solucionada en la ley cuando una de las partes considera aquel oficio relevante para exhibirlo a un testigo, diligencia actualmente imposible de realizar.</i>	Duda de interpretación
COPIAPÓ		Artículo 501 del Código del Trabajo en relación con los artículos 459 y 478 b) del mismo cuerpo legal	<p><i>Subsisten inquietudes en cuanto al procedimiento monitorio, [en cuanto] el inciso final de la norma contenida en el artículo 501 del Código del Trabajo dispone que el Juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá contener las menciones señaladas en los numerales 1,2,5,6 y 7 del artículo 459 -misma norma' que se repite en el inciso final del propio artículo 459-, es decir, no resultan obligatorias aquellas comprendidas en los N°3 y 4, referida la última al análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.</i></p> <p><i>Lo señalado resulta contrario con la procedencia de la causal de nulidad establecida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, vale decir, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, motivo de invalidación que -como se ha dicho- se relaciona con la estructura sustancial del fallo, protegiendo la garantía de la razonabilidad, particularmente en su determinación fáctica, en la medida que, exigiendo la ley valoración acorde a las reglas de la sana crítica, ésta no puede contrariar manifiestamente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos y técnicos. Sin perjuicio de ello, al no exigir la ley que la sentencia que se dicta en un procedimiento monitorio contenga el análisis de toda la prueba rendida, la determinación de los hechos probados y el razonamiento que conduce a ellos, significaría concluir que el recurso de nulidad, en cuanto su sustente en esta causa, resulta improcedente o debe siempre desestimarse, por escapar dicha eventual inobservancia al control de la Corte.</i></p> <p><i>Una solución, que se puede clasificar de intermedia, es entender que es posible examinar la concurrencia de la mencionada causal, pero únicamente en respecto de casos en que la sentencia impugnada, a pesar de la prerrogativa otorgada por el legislador, precisamente contenga dichas menciones, pero luego, en el evento de constatare la infracción denunciada, procede a acoger el recurso.</i></p>	Duda de interpretación
		Artículo 474 del Código del Trabajo en relación con el artículo 432 del mismo cuerpo legal y con el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil.	<i>Prevalecen dudas en cuanto a la norma del artículo 474 del Código del Trabajo, que da inicio a la regulación de los recursos, [que] dispone la aplicación supletoria de las normas del Libro I del Código de Procedimiento Civil, mientras que, en forma previa, el artículo 432, que se ubica en el Capítulo II, que se refiere a los Principios Formativos del Proceso y al Procedimiento en el Juicio del Trabajo, establece igualmente la aplicación supletoria en todo lo no regulado en el Código o las leyes de las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil "a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento", limitación que no se contiene en el artículo 474, lo que lleva a sostener que no alcanza a la regulación de los recursos. En este orden de ideas, cabe preguntarse si resulta admisible que las partes, acuerden la suspensión del procedimiento, en la forma y términos que faculta el inciso final del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, lo que implicaría excluir de la tabla el recurso por dicho lapso, desvirtuándose el sentido de la norma del artículo 484, y reñiría con el principio de celeridad consagrado en el artículo 425 del Código del Trabajo.</i>	Duda de interpretación

	Artículo 481 del Código del Trabajo.	También se mantienen dudas en cuanto a lo dispuesto en el artículo 481 del Código del Trabajo, que trata de la audiencia para la vista del recurso de nulidad, [y] consagra en su inciso 3° la posibilidad de que las partes puedan rendir prueba, pero únicamente para probar la causal de nulidad alegada, sin embargo no se señala la oportunidad en que ella puede ser ofrecida -como sí acontece con el artículo 359 del Código Procesal Penal-, pudiendo suceder que ello ocurra momentos antes de la vista, o que consista en numerosos documentos, testimonial o confesional, circunstancias que razonablemente harían aconsejable suspender la vista, de oficio o a petición de parte, para permitir, por ejemplo, la revisión de los documentos por la recurrida, la citación de los testigos o absolvente. No obstante, ello no está regulado y tampoco existe norma alguna que permita a la Corte decidir acerca de tales asuntos.	Vacío legal
	Artículo 174 del Código del Trabajo.	En relación a las demandas de desafuero maternal, éstas son tramitadas, en razón a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, en procedimiento ordinarios, habiéndose tomado conocimiento que en otras jurisdicciones, aquellas son tramitadas conforme a las normas del procedimiento monitorio. Sobre lo cual también se expresan dudas.	Duda de interpretación
	Artículo 500 del Código del Trabajo en relación con el artículo 451 del mismo cuerpo legal.	En cuanto al procedimiento monitorio, resulta imposible de conciliar la aplicación supletoria de la regla contenida en el inciso 1° del artículo 451 del Código del Trabajo, relativa a la anticipación mínima de quince días con que debe verificarse el emplazamiento del demandado, con aquella contenida en el artículo 500 inciso 5° del mismo texto, norma que -para el caso que el Tribunal estime necesario citar a audiencia única de contestación, conciliación y prueba- dispone perentoriamente que ésta deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a la presentación del requerimiento. No existe solución a esta problemática en las normas actualmente vigentes.	Duda de interpretación
LA SERENA	Artículo 474 del Código del Trabajo en relación con los artículos 64 y 165 del Código de Procedimiento Civil.	Se expresan las dificultades que han acarreado las reiteradas suspensiones de la vista de los recursos y recusaciones de las partes respecto de los recursos de nulidad laborales, en razón de la aplicación supletoria de los artículos 64 y 165 del Código de Procedimiento Civil que se ha hecho en virtud de la regla de supletoriedad de las normas del Libro Primero de la ordenanza procesal civil que establece el artículo 474 del Código del Trabajo. Al respecto se expresa que falta una norma expresa relativa a la materia como la del artículo 357 del Código Procesal Penal, mediante la que se limita el ejercicio de estas prerrogativas. Se expresa que esta omisión ha llevado a un constante atraso en la vista de los recursos de nulidad, los que permanecen por más de un mes incluidos en tabla.	Dificultades por normas legales
	Artículo 478 del Código del Trabajo.	La referida norma presente dificultades, ya que se vislumbra como un precepto contradictorio con el principio de inmediación, por cuanto exige al Tribunal ad quem, en caso de acoger el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en sus letras b) y e), dictar sentencia de reemplazo, lo que implica para el referido tribunal proceder al análisis y ponderación de los elementos de convicción que se han recibido e incorporado ante el tribunal a quo.	Solicitud de reforma legal
	Artículo 477 del Código del Trabajo en relación con el artículo 478 letra c) del mismo cuerpo legal.	Ha suscitado dificultad al momento de conocer y resolver un recurso de nulidad, el distinguir claramente la diferencia entre la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, relativa a que la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, con el motivo de nulidad previsto en el artículo 478 letra c) del mismo texto legal, procedente cuando resulta necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal. Se hace difícil distinguir en qué circunstancias o hipótesis estamos ante una u otra causal de nulidad.	Dificultades por normas legales
VALPARAÍSO	Artículo 482 del Código del Trabajo.	Artículo 482 del Código del Trabajo, referido al plazo de cinco días para fallar las causas laborales, desde la vista de la causa, toda vez que dicho plazo resulta insuficiente para la redacción de la sentencia respectiva, ya que un término mayor, como por ejemplo el contemplado en el Código Procesal Penal para la resolución de las causas penales, permite un acabado estudio de los antecedentes.	Solicitud de reforma legal

RANCAGUA	Artículo 482 del Código del Trabajo.	<p><i>Se estima absolutamente necesario modificar el plazo del inciso primero del artículo 482 en cuanto concede un plazo de 5 días para fallar el recurso de nulidad.</i></p> <p><i>Considerando que no existe relación de la causa y que, en ocasiones deben necesariamente oírse los audios de las audiencias correspondientes, el referido plazo resulta absolutamente insuficiente.</i></p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 481 del Código del Trabajo.	<p><i>No existe claridad acerca de la obligación de los abogados de anunciarse para alegar en la vista de los recursos de Nulidad en Materia Laboral. El artículo 481 del Código del Trabajo se refiere a la audiencia y alegatos, sin regular la forma en que las partes deben comparecer para anunciarse y alegar, sin embargo parecen no quedar exentas de dicho deber, toda vez que se establece que el alegato de cada parte no puede exceder de 30 minutos. Por otro lado el artículo 474 hace remisión a las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, de lo que cabe preguntarse si esa remisión puede entenderse hecha al 223 inciso 2º, concluyendo que no pueden alegar los abogados que no se hubiesen anunciado y de esa manera declarar abandonado el recurso, o, de contrario estimar que la ausencia de norma expresa exime a la parte de la referida obligación.</i></p>	Duda de interpretación
	Artículo 454 del Código del Trabajo.	<p><i>Falta de norma en relación a la a procedencia de prueba nueva en procedimiento ordinario. Ello ha sido alegado por los abogados atendido que hay pruebas que conocen o se configuran con posterioridad a la audiencia preparatoria y en forma previa a la audiencia de juicio.</i></p>	Vado legal
	Artículo 500 del Código del Trabajo.	<p><i>El hecho de que la contestación de la demanda en los procedimientos monitorios se realice en la misma audiencia, ha provocado problemas en cuanto a la defensa de la contraria, toda vez que esta conoce en ese acto las eventuales excepciones y demandas reconventionales, por lo que en muchas ocasiones no puede traer prueba preparada al efecto, quedando en la indefensión.</i></p>	Dificultades por normas legales
	Artículo 172 del Código del Trabajo.	<p><i>Estiman los jueces, que existe una particular discusión jurídica que se repite constantemente en cuanto si la asignación de movilización y colación forma parte o no del cálculo de la última remuneración.</i></p>	Duda de interpretación
	Artículo 453 N° 8 del Código del Trabajo.	<p><i>Existen dudas respecto a si es aplicable o no el apercibimiento de arresto a los testigos que no concurren a la audiencia de juicio, sin ninguna justificación, encontrándose legalmente citados.</i></p>	Duda de interpretación
	Artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 474 del Código del Trabajo.	<p><i>La duda en cuanto a si procede o no la adhesión a la apelación en materia laboral, al remitirse el artículo 474 del Código del Trabajo a las disposiciones que rigen los recursos en materia civil. En la afirmativa, el problema sería la oportunidad para hacerlo, si las partes no están obligadas a comparecer en segunda instancia, salvo que se entendiera que puede hacerse antes de la vista de la causa.</i></p>	Duda de interpretación

TALCA	Artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 474 del Código del Trabajo.	<i>La duda en cuanto a si procede la adhesión al recurso de nulidad en materia laboral, en virtud de los mismos fundamentos dados precedentemente.</i>	Duda de Interpretación
	Abandono del recurso de apelación, en relación con el artículo 481 del Código del Trabajo.	<i>En materia laboral, el abandono del recurso está previsto sólo respecto del recurso de nulidad atendida su regulación excepcional. No obstante, el Ministro Hernán González García señala que la norma genera dudas, pero la interpretación sistemática conduce a aplicarla, supletoriamente, para los recursos de apelación.</i>	Vacío legal
CHILLÁN	Artículo 454 del Código del Trabajo.	<i>El artículo 454 del Código del Trabajo, no contempla la posibilidad de incorporar prueba nueva en la audiencia de juicio como si ocurre en materia de familia, no divisiéndose la razón de ello, dado que también en materia laboral pueden darse los supuestos de prueba nueva, y ello ayudar a la mejor resolución del conflicto.</i>	Vacío legal
	Comparecencia testigos.	<i>Problemas con la comparecencia de los testigos al juicio, ya que aparentemente no se podrían aplicar la medida de apremio del artículo 380 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil.</i>	Duda de Interpretación
	Ausencia norma de plazo audiencia del juicio monitorio.	<i>En el procedimiento monitorio laboral no existe plazo establecido legalmente que deba mediar entre la notificación de la demanda (citación), y la audiencia de juicio monitorio, lo cual al quedar entregado al criterio de cada tribunal podría generar indefensión del demandado.</i>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 494 del Código del Trabajo.	<i>Dada la complejidad de las causas sobre tutela de derechos fundamentales, se estima que el plazo para fallar dichas causas por los tribunales de primer grado, debiera ser al menos igual que el existente para las causas ordinarias, es decir, 15 días y no 10, como ocurre en la actualidad.</i>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 453 N° 4 del Código del Trabajo.	<i>Procedimiento a seguir en materia de presentación y objeción por prueba ilícita regulada en el artículo 453 N° 4 del Código del Trabajo, atendida su falta de regulación en la práctica y si es alegada en la audiencia preparatoria o en la audiencia de juicio.</i>	Duda de Interpretación
	Artículo 500 del Código del Trabajo.	<i>En cuanto a la procedencia de la reconvencción en juicio monitorio. ¿Es o no procedente?</i>	Vacío legal
	Artículo 183 E del Código del Trabajo.	<i>El artículo 183 E del Código del Trabajo establece una responsabilidad directa de la empresa principal respecto de la seguridad del trabajador de la empresa contratista. Surge la duda al momento de condenar a pagar una indemnización de perjuicios por daño moral por un accidente del trabajo ocurrido, en determinar si las empresas deben responder en forma simplemente conjunta -cada uno por una parte del daño- o bien si existe responsabilidad solidaria.</i>	Duda de Interpretación

CONCEPCIÓN

<p>Artículo 161 del Código del Trabajo en relación con el artículo 169 del mismo cuerpo legal.</p>	<p><i>Incompatibilidad de las acciones de despido improcedente por Necesidades de la empresa del artículo 161 del Código del Trabajo, deducida ante el Juzgado de Letras del Trabajo y la ejecutiva del artículo 169 del mismo Código ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional.</i></p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 172 del Código del Trabajo.</p>	<p><i>Para el caso previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo y para trabajadores con remuneraciones fijas y variables, el promedio de lo percibido en los tres últimos meses se realiza considerando sólo las partidas variables y sumando la parte fija (que pudo haber experimentado un cambio sólo el último mes) o se considera como un solo todo lo fijo y variable y se determina el promedio.</i></p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 489 del Código del Trabajo.</p>	<p><i>La suspensión del plazo para demandar prevista en el artículo 489 inciso segundo del Código del Trabajo exige reclamo por vulneración de derechos fundamentales o basta reclamar por despido injustificado.</i></p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 7 transitorio del Código del Trabajo.</p>	<p><i>El artículo 7 transitorio del Código del Trabajo que se aplica respecto del límite en el pago de las indemnizaciones respecto de los años trabajados, incluye el tope de la base de cálculo de 90 U.F.</i></p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 3 del Código del Trabajo (modificado por la Ley N° 20.760) en relación con el artículo 507 del mismo cuerpo legal.</p>	<p><i>En la ley N° 20.760 de 9 de julio de 2014, que establece supuestos de multiplicidad de relaciones sociales consideradas un solo empleador y sus efectos con relación sujeto activo de las organizaciones sindicales del artículo 507 ¿la ley se refiere también a las organizaciones inter empresa? La acción puede interponerse en cualquier momento, esto es, ¿terminada la relación laboral?, ¿se mantiene el subterfugio como figura independiente distinta de varias empresas que conforman un solo empleador?</i></p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Artículo 146 ter del Código del Trabajo (introducido por la Ley N° 20.786).</p>	<p><i>En la ley N° 20.786, en el artículo 146 ter, ¿procede registrar los contratos datados con anterioridad a la vigencia de la ley?</i></p>	<p>Duda de Interpretación</p>
<p>Abandono del recurso de apelación, en relación con el artículo 481 del Código del Trabajo.</p>	<p><i>Procedencia o no del abandono del recurso de apelación en materia laboral, por inasistencia del recurrente a la audiencia correspondiente en la Corte de Apelaciones, tal como lo establece el artículo 481 del Código del Trabajo para el recurso de nulidad.</i></p>	<p>Vacío legal</p>

	Artículo 470 del Código del Trabajo en relación con el artículo 472 del mismo cuerpo legal.	<i>Respecto a la procedencia del recurso de apelación en los juicios ejecutivos de cobranza laboral, teniendo presente la restricción establecida en el artículo 472 del Código del Trabajo.</i>	Duda de interpretación
TEMUCO	Artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo en relación al artículo 454 del mismo cuerpo legal.	El artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo establece que si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, éstas tendrán el derecho a solicitar nuevo día y hora para su realización dentro de quinto día. No obstante, nada se establece para la audiencia de juicio al respecto. Entonces, la duda que surge es sobre si puede el tribunal tomar de oficio la audiencia de juicio si ninguna de las partes asiste a la misma.	Vacío legal
	Artículo 183 B del Código del Trabajo.	<i>"En materia de subcontratación y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 183_B del Código del Trabajo ¿Ante el despido de un trabajador con fuero, responde de la indemnización por el período del fuero la empresa principal, a pesar que el trabajador dejó de prestar servicios para dicha empresa en régimen de subcontratación? La misma duda se presenta respecto de las indemnizaciones por accidente del trabajo.</i>	Duda de interpretación
	Jornadas especiales del trabajo (Artículos 25, 25 bis y 26 bis).	<i>"En materias de jornadas especiales del trabajo, la reglamentación hecha por los artículos 25, 25 bis y 26 bis del Código del trabajo provoca dificultades e incluso discusión sobre su legalidad y constitucionalidad, provocando que se hayan efectuado distintos requerimientos al Tribunal Constitucional, el que ha declarado inaplicable la norma en comento, provocando retraso en la tramitación de la causa".</i>	Dificultades por normas legales
	Artículo 465 del Código del Trabajo.	<i>En materia de cumplimiento de sentencia, ha surgido la duda respecto del plazo para deducir el recurso de apelación en contra de la misma, toda vez que el código del trabajo se remite a las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, estatuto este último que contempla plazos diferentes para la tramitación del recurso de apelación, dependiendo de la naturaleza jurídica de la sentencia que se impugna. A este respecto, no existe claridad en cuanto a la naturaleza jurídica de la sentencia que falla las excepciones en la etapa de cumplimiento.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 381 del Código del Trabajo.	<i>En materia de huelga y reemplazo de trabajadores, al tenor de lo dispuesto en el artículo 381 del Código del Trabajo, se plantea la duda de si para estar frente a una infracción se requiere la efectiva contratación de nuevos trabajadores o basta la reasignación de funciones de otros trabajadores no movilizados que suplan los puestos de trabajo de aquellos que están en huelga.</i>	Duda de interpretación
	Artículo 482 del Código del Trabajo.	<i>Se ha apreciado la necesidad de ampliar el plazo para dictar sentencia en recursos de nulidad laboral, pues el plazo actual de cinco días resulta demasiado restringido si se consideran las demás responsabilidades asignadas a los Ministros encargados de la redacción de tales acuerdos.</i>	Solicitud de reforma legal

VALDIVIA	Artículo 162 del Código del Trabajo en relación con el artículo 500 del mismo cuerpo legal.	<p>Conforme al artículo 162 del Código del Trabajo, la nulidad del despido por falta de pago de las cotizaciones previsionales puede enervarse por el empleador mediante el pago del monto de cotizaciones adeudadas dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la demanda respectiva. Esta facultad puede ejercerse sin inconvenientes en el procedimiento de aplicación general.</p> <p>No obstante, la duda se genera por la incompatibilidad de este plazo con la norma del artículo 500 del Código del Trabajo, que ordena en el procedimiento monitorio que la audiencia de contestación, conciliación y prueba se celebre dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la demanda.</p> <p>Esto genera que el empleador no pueda disponer de la totalidad del plazo que le otorga el artículo 162 del Código del Trabajo para enervar la acción de nulidad del despido, lo que ha obligado a suspender la audiencia para que el empleador pueda ejercer en propiedad dicha facultad.</p>	Duda de interpretación
	Recurso de hecho.	Siendo procedente el recurso de hecho en materia laboral, la duda que surge es desde cuando se cuenta el plazo para la interposición de este medio de impugnación en primera y segunda instancia respectivamente, toda vez que en este procedimiento no es necesaria la comparecencia de las partes para la vista de la causa.	Duda de interpretación
	Artículo 478 del Código del Trabajo.	<p>El artículo 478 del Código del Trabajo establece que el tribunal ad quem deberá dictar sentencia de reemplazo en el caso de acoger el recurso de nulidad fundado en, entre otras, las causales de las letras b) y e) del mismo artículo.</p> <p>No obstante, este imperativo contraviene el principio de inmediación consagrado por el artículo 427 del mismo Código del Trabajo, el que incluso sanciona con nulidad el incumplimiento de este deber. La dictación de sentencia de reemplazo obliga necesariamente al tribunal ad quem a entrar al análisis y ponderación de la prueba rendida ante otro órgano resolutor, el tribunal a quo, lo que contraviene el principio reseñado.</p> <p>Por tanto, pareciera más acertado establecer que de acogerse el recurso de nulidad, deberá dictarse sentencia declarando la nulidad del juicio y de la sentencia, a fin de que el juez no inhabilitado conozca del nuevo juicio y con la prueba ante él rendida proceda a la dictación del nuevo fallo.</p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 480 del Código del Trabajo.	<i>Al no existir norma que conceda algún recurso, por ejemplo reposición, a la declaración de la Corte sobre la inadmisibilidad del recurso de nulidad, se contrarían las normas del debido proceso, del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en cuanto el derecho al recurso, a diferencia de la situación que expresamente establece el artículo 483-A del Código del Trabajo, respecto de la misma declaración y por el mismo Tribunal, acerca de la resolución de inadmisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia.</i>	Solicitud de reforma legal / interpretación
	Artículo 512 del Código del Trabajo.	<i>Atendida la norma de la referencia y tratándose de la resolución del Director del Trabajo que reconsidera la multa administrativa, específicamente, el inciso segundo establece que "Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de 15 días de notificada y en conformidad al artículo 474 de este Código." Al respecto, la referencia al artículo 474 citado plantearía la dificultad en cuanto a que esta norma dispone que los recursos se rigen por las normas del párrafo quinto y supletoriamente por las normas del libro primero del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que no se indica el procedimiento concreto a que se debe sujetarse el reclamo presentado contra la resolución presentada contra el Director del Trabajo. Pareciera que la referencia es más bien al artículo 503 del Código del Trabajo que se refiere a que el procedimiento de reclamación es de aplicación general a menos que la cuantía de la multa al momento de la dictación de la resolución que la impone o "de la que resuelve la reconsideración administrativa" respecto de ella, sea igual o inferior a 10 ingresos mínimos mensuales, caso en el cual se sustentara bajo las reglas del procedimiento monitorio.</i>	Solicitud de reforma legal

COYHAIQUE

Artículo 465 del Código del Trabajo.	<i>Esta norma podría plantear problemas por la aplicación del cumplimiento incidental del artículo 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ya que algunos abogados han pedido la reserva de derecho establecida en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, generándose la dificultad de determinar si procede o no dicho cumplimiento.</i>	Dificultades por normas legales
Artículo 426 del Código del Trabajo.	<i>Que en el Código del Trabajo no existe una norma especial para el entorpecimiento de testigos que concurren a la audiencia de juicio, por lo que podría solucionarse el inconveniente por el artículo 426 de dicho código, respecto al caso fortuito o fuerza mayor y suspender la audiencia, norma que en todo caso podría plantear dificultades por haber entorpecimientos que no se encuentran en la esfera de dichos conceptos por lo que sería conveniente normarlos.</i>	Duda de interpretación
Artículo 454 del Código del Trabajo.	<i>En el Código del Trabajo no existe norma especial para regular la prueba nueva o prueba ignorada o la prueba sobre prueba, como en el caso del Código Procesal Penal en su artículo 336, de gran utilidad para los intervinientes y Juzgadores, especialmente si el artículo 451 del citado cuerpo legal exige que la las partes deberán sólo "señalar" al Tribunal los medios de prueba de que piensan valerse, de manera que, en el caso de alguna prueba documental, ni el Tribunal ni la contraparte se enterará de su contenido como para refutarla o impugnarla.</i>	Vacío legal
Artículos 451 y 453 N° 1 del Código del Trabajo.	<i>De conformidad a lo dispuesto en el artículo 451 y 453 número 1, ambos del Código del Trabajo, la audiencia preparatoria se celebrará con la parte que asiste, si ambas partes se ausentan, existe el pazo de 5 días para pedir nueva fecha, el que transcurrido, por el artículo 435 del mismo Código, extingue el derecho a pedir nueva audiencia fuera de dicho plazo, por lo que, normalmente, los Jueces proceden a resolver el archivo de la causa, término que no ha sido contemplado legalmente.</i>	Duda de interpretación
Competencia territorial del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique.	<i>Finalmente, los dos Juzgados de Letras que originalmente existían en la ciudad de Coyhaique, con Jurisdicción del Trabajo, tenían competencia sobre las comunas de Coyhaique y Río Ibáñez; sin embargo, con motivo del artículo 415 letra k), al crearse el Tribunal especializado del Juzgado de letras del Trabajo, en Coyhaique, con conocimiento en las materias de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional (por aplicación del inciso segundo del artículo 421 del Código del Trabajo), se restringió, inexplicablemente, el territorio de competencia sólo a la comuna de Coyhaique, quedando en tierra de nadie la comuna de Río Ibáñez, problema que puntualmente se ha solucionado con el nuevo procedimiento y en atención al principio de inexcusabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, de manera que se sugiere se inste, por los medios que correspondan y ante quien sea menester, se subsane el vacío legislativo.</i>	Vacío legal
Artículo 497 del Código del Trabajo en relación con el artículo 498 del mismo cuerpo legal.	El artículo 497 del Código del Trabajo establece al reclamo ante la Inspección del Trabajo como requisito previo de admisibilidad de la demanda laboral en el procedimiento monitorio. No obstante, el artículo 498 del Código del Trabajo establece que, iniciada la acción administrativa, en caso de no comparecer el reclamante al comparendo estando legalmente citado, podrá deducir la demanda judicial conforme a las reglas del procedimiento de aplicación general. Por tanto, la duda que surge es si debe declararse inadmisibile la demanda de quien no haya deducido reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo cuando se demanda en un procedimiento monitorio, en que la cuantía del asunto sea 10 o menos ingresos mínimos mensuales.	Duda de interpretación
Artículo 453 N° 4 del Código del Trabajo.	<i>Dentro del sistema de libertad probatoria que rige en el nuevo procedimiento laboral, nos cabe plantearnos la pregunta si es factible que una de las partes pueda llamar a absolver posiciones a su propio representante legal.</i>	Duda de interpretación

PUNTA ARENAS	Artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo.	<p><i>Ante la inactividad de las partes, que no solicitan nueva audiencia preparatoria dentro del plazo señalado en el citado precepto, no se establece sanción a imponer por el Tribunal.</i></p> <p><i>El Juzgado de Letras de Puerto Natales ante esta situación ha esperado el plazo señalado por la ley y, si las partes no han solicitado nuevo día y hora para la audiencia preparatoria, de oficio cita a las partes a la referida audiencia.</i></p>	Vacío legal
	Artículo 482 del Código del Trabajo.	<p><i>El citado precepto dispone que "El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro de cinco días contado desde el término de la vista de la causa."</i></p> <p><i>Esta Corte, teniendo en cuenta la complejidad de las materias y trascendencia de las decisiones que se adoptan en el marco de las causas laborales, estima que un plazo razonable para fallar el referido recurso sería el de 30 días contado desde el término de la vista de la causa.</i></p> <p><i>Además, cuando se trata de varios trabajadores y varias causales de nulidad opuestas por diversas partes, debería haber criterios de flexibilidad para ampliar el plazo en proporción al número de personas que conforman cada parte, cuya situación de hecho difiere y exige análisis de diferentes antecedentes, en conjunto con un criterio basado en el número de partes que recurren: demandantes, demandados principales, demandados solidarios y subsidiarios, y un criterio fundado en el número de causales y capítulos dentro de cada causal planteada en los recursos de nulidad.</i></p> <p><i>También debe tenerse en consideración, que de acuerdo al artículo 484 del Código del Ramo, debe designarse un día a la semana para la vista de estas causas, por lo que se produce el problema de tener que fallar todas las nulidades del día dentro del mismo plazo, el que además debe ser utilizado para fallar recursos de amparo y protección, que tienen plazos más breves o igual, según el derecho vulnerado, en este caso.</i></p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 511 del Código del Trabajo.	<p><i>Tratándose de las multas impuestas por la Inspección del Trabajo, establece en el artículo 511 del Código del Trabajo, el recurso de reconsideración administrativa, para su interposición se concede el plazo de treinta días, que según la interpretación del ente fiscalizador es de días corridos, en tanto que la interpretación judicial, estima que dicho plazo se computa de acuerdo a las normas previstas en la ley N°19.880; aquello no obstante encontrarse zanjado a nivel jurisprudencial, motiva numerosos reclamos de multa administrativa; lo que debería ser resuelto mediante modificación legal.</i></p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 487 del Código del Trabajo (Tutela Laboral).	<p><i>La primera duda se relaciona con el artículo 487, porque no existe razón aparente para restringir la acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos, obligando al trabajador a desplegar una gama de acciones, en circunstancias que la relación laboral es una misma y la realidad demuestra que generalmente los hechos o son los mismos o están relacionados. El procedimiento, es el de aplicación general, así es que, no obedecería a razones procesales.</i></p>	Solicitud de reforma legal
	Artículo 489 del Código del Trabajo (Tutela Laboral).	<p><i>A propósito de esta regla, surge otra duda, porque no hay razón, para que, en situación de urgencia, como es la de despido, se elimine la preferencia del artículo 488 para su tramitación.</i></p>	Solicitud de reforma legal

		<p>El artículo 493 del Código del Trabajo establece que sólo <i>“cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.”</i></p> <p>Artículo 493 del Código del Trabajo (Tutela Laboral). Esto en la práctica torna a la regla en una verdadera carga de prueba de indicios para el solicitante de tutela, la que no existe en otras acciones y no se justifica en una de esta naturaleza.</p> <p><i>Si la denuncia pasa el estándar de los criterios del tribunal, para apreciar esos antecedentes e indicios, recae en el empleador explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad, lo que es un parámetro de menor entidad que la regla del artículo 454 N° 1) inciso segundo, que le exige acreditar la veracidad de los hechos.</i></p>	Solicitud de reforma legal
		<p>Se hace presente que la regulación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es insuficiente y dispersa, resultando inconsistente con la normativa internacional de derechos humanos que Chile ha ratificado (Convenios Nros 87, 98, 105 y 138 adoptados por la Conferencia General de la OIT y promulgados por el Decreto 227 del Ministerio de Relaciones Exteriores).</p> <p>Regulación derechos de los niños en materia laboral. No ha existido un desarrollo normativo que se alinee con las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño en la Observación General N° 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. En este sentido, el Estado debe garantizar un entorno óptimo para la plena aplicación de la Convención y sus protocolos facultativos, lo que se traduce en la materia, en crear entornos jurídicos y normativos estables y predecibles que permitan a las empresa respetar los derechos del niño, normas claras y debidamente aplicadas, en materia de trabajo, empleo, salud, seguridad y medio ambiente, etc.</p>	Solicitud de regulación normativa
<p>JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE SAN CARLOS</p>	<p>Artículo 454 del Código del Trabajo.</p>	<p><i>Se advirtió vacío en la legislación laboral, en el artículo 454 del Código del Trabajo, en el sentido de que dicha normativa no considera la posibilidad de incorporar prueba nueva en la audiencia de juicio a diferencia de lo que ocurre en materia de familia, en circunstancias de que en materia laboral igualmente puede verificarse el supuesto de que aparezca prueba nueva que diga relación directa con el juicio y que está llegue a conocimiento de la partes una vez que ya se verificó la audiencia preparatoria, vedándose con ello la posibilidad de incorporar un medio de prueba relevante para la resolución del litigio.</i></p>	Vacío legal

MATERIA	CORTE DE APELACIONES	ARTÍCULO	DUDA O DIFICULTAD	ID
ORGÁNICA	ANTOFAGASTA	Artículo 212 del Código Orgánico de Tribunales.	<p>La aplicación del artículo 212 del Código Orgánico de Tribunales, genera diversas y contrapuestas interpretaciones que perjudican el adecuado mecanismo de subrogación de los jueces. En efecto, mientras los dos primeros incisos de dicha disposición razonan sobre el supuesto de que los subrogantes son, en primer lugar, los secretarios del tribunal y sólo a falta de éstos, los jueces, el inciso final origina dudas en cuanto a que podría entenderse que invierte la regla, es decir, cuando la subrogación ha de producirse habiendo dos o más tribunales de distinta jurisdicción, es el juez y no el secretario de la otra competencia quien tiene que subrogar al ausente, lo que representa un contrasentido, agravado por la existencia de criterios dispares en diversas Cortes de Apelaciones que producen en definitiva una falta de certeza.</p> <p>Además, la decisión adoptada por algunas Cortes impide a los subrogantes dictar sentencia, haciendo estricta aplicación del artículo 211 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, causando nefastas consecuencias para la imagen y prestigio de la función jurisdiccional en las subrogaciones prolongadas en el tiempo, especialmente al público que tiene pendiente la dictación del fallo.</p>	Duda de Interpretación
		Artículo 503 del Código Orgánico de Tribunales.	<p>Dada la proliferación de abogados nombrados como suplentes, interinos e incluso titulares en cargos o empleos de Secretaría, en mucho de estos casos, sólo por periodos de meses, resulta indispensable regular correctamente la prohibición de estos abogados de ejercer la abogacía según lo dispone el artículo 14 de la Ley 17.877, pero que no queda suficientemente claro con lo dispuesto en el artículo 503 del Código Orgánico de Tribunales, de manera que en la forma que está redactada la disposición actual, se produce una dificultad de interpretación.</p> <p>Se propone eliminar los incisos segundo y tercero y agregar en el inciso primero el artículo 316. En consecuencia, para los oficiales de Secretaría de la Administración Justicia les quedaría prohibido ejercer la abogacía, salvo la representación y patrocinio de causas personales, cónyuges, ascendientes o descendientes y colaterales hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad y pupilos.</p>	Solicitud de reforma legal
	SANTIAGO	Ley 20.774 que suprime el feriado judicial en relación con los artículos 61 y 57 del Código Orgánico de Tribunales.	<p>La aplicación de la Ley N°20.774, que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica, ha generado dificultades en su aplicación práctica considerando las modificaciones parciales introducidas al Código Orgánico de Tribunales en relación al año judicial. Así, por ejemplo, el reformado artículo 61 ordena actualmente efectuar el sorteo anual de la composición de las salas de las Cortes de Apelaciones, el primer día hábil de diciembre del año anterior a aquél en que hayan a funcionar, dando a entender que el inicio del año judicial comenzaría en enero del año siguiente, situación que se contraponen con la falta de modificación legal al artículo 57 del mismo cuerpo legal, que establece como período de vigencia del Presidente de la Corte de Apelaciones un año contado desde el 1° de marzo.</p> <p>De esta manera, con la modificación legal introducida por la Ley N°20.774, se han producido dudas en su aplicación, al mantener vigente e introducir reformas a normas que se relacionan entre sí relativas al período en que se extiende el año judicial.</p>	Duda de Interpretación
	COYHAIQUE	Artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales.	<p>El artículo 50 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales establece las personas que gozan de fuero en materia civil y entrega el conocimiento de estos asuntos a un Ministro de Corte de Apelaciones.</p> <p>La duda que surge es si el conocimiento de las causas laborales y/o de familia de las personas que gozan de fuero corresponde a los tribunales especiales, esto es, al respectivo juzgado de letras del trabajo o juzgado de familia de conformidad con el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales o si corresponde a un Ministro de la Corte de Apelaciones de conformidad con el artículo 50 N° 2 del mismo cuerpo de leyes.</p>	Duda de Interpretación
		Artículos 244 y 246 del Código Orgánico de Tribunales en relación con el artículo 78 de la Constitución Política.	<p>En el plano Administrativo surgen dudas respecto a la aplicación de la normativa dispuesta en los artículos 244 y 246 del Código Orgánico de Tribunales, en relación al artículo 75 [78] inciso final de la Constitución Política de la República, y el alcance de los Acuerdos que esta Ilustrísima Corte ha tenido que adoptar, en relación a dichas normas, en situaciones de emergencia.</p> <p>Concretamente, en las oportunidades en que se ha designado Jueces en calidad de Interinos, por sobre los 60 días, improrrogables, que dispone el artículo 75 [78] de la Carta Fundamental o por sobre los 4 meses, que como límite establece el artículo 246 del cuerpo legal orgánico, a los señalados interinatos.</p>	Dificultades por normas legales

<p>JUZGADO DE LETRAS Y DE FAMILIA DE SAN CARLOS</p>	<p>Artículo 269 del Código Orgánico de Tribunales en relación con el artículo 478 del mismo cuerpo legal.</p>	<p>El artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales establece que habiéndose concedido a un notario, conservador a archivero un permiso para ausentarse del lugar de su residencia y dejar de asistir a su oficina hasta por dos meses, podrá éste proponer al juez el abogado que debe subrogarlo bajo su responsabilidad, propuesta que en el caso <u>de los notarios y conservadores de cuarta categoría</u> podrá recaer en el oficial primero de la oficina respectiva.</p> <p>Sin embargo, el artículo 269 del Código Orgánico de Tribunales <u>sólo establece hasta una tercera categoría</u> en lo relativo a la serie de notarios, conservadores y archiveros del Escalafón Secundarios.</p> <p>Por tanto, se aprecia un vacío en la regulación al no existir actualmente una referencia a una cuarta categoría entre los notarios y conservadores.</p>	<p>Vacío legal</p>
---	---	---	--------------------

MATERIA	CORTE DE APELACIONES	ARTÍCULO	DUDA O DIFICULTAD	ID
ADMINISTRATIVO Y PÚBLICO	LA SERENA	Recurso de protección.	<i>A propósito del cumplimiento de la sentencia dictada en los recursos de protección se advierte un vacío legal, cuando la misma trata de cumplir respecto de particulares y tratándose de cuestiones accesorias, como el pago de costas.</i>	Duda de Interpretación
	VALDIVIA	Sanciones administrativas.	Las regulaciones sectoriales imponen multas como sanción frente a las inobservancias de sus mandatos, entregando a la Administración del Estado la potestad de investigar y sancionar las infracciones cometidas. No obstante, ninguna de estas normativas establece reglas de prescripción, presentándose dos posibles lecturas: a) se aplica la legislación penal de forma supletoria y en especial la prescripción de 6 meses contados desde la ocurrencia del hecho de que se trate, por cuanto los hechos constitutivos de las multas administrativas son equiparables a las faltas al no ser posible reputarlos como delitos o crímenes; o b) se aplica supletoriamente el Código Civil como legislación común, aumentando el término de prescripción para imponer la sanción pecuniaria.	Vacío legal
	COYHAIQUE	Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio.	En el caso de acciones constitucionales, como el amparo, la protección y el amparo económico, sucede que existen personas que –en vez de actuar a favor de– se atribuyen la representación de la persona afectada por la supuesta vulneración a la garantía constitucional denunciada como infringida sin acreditar representación. La duda que surge al respecto es si es necesario en estos casos hacer cumplir las disposiciones sobre la Ley de Comparecencia en Juicio.	Duda de Interpretación

MATERIA	CORTE DE APELACIONES	ARTÍCULO	DUDA O DIFICULTAD	ID
		<p>Artículo 50 B de la Ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en relación con el artículo 38 de la Ley 18.287 que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local.</p>	<p>La Ley 19.496 ha ampliado su ámbito de aplicación y, en consecuencia, una mayor cantidad de asuntos han sido entregados al conocimiento de los Juzgados de Policía Local.</p> <p>No obstante, esto ha ocasionado problemas en atención a la complejidad de los asuntos y a la deficiencia de la tramitación dada por la comparecencia de los afectados sin la asistencia profesional que el asunto amerita, lo que influye en los fallos que se dictan, los que sólo son susceptibles de apelación y posteriormente de sólo queja debido a la improcedencia de la casación.</p> <p>Teniendo presente lo anterior y las distintas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre estas materias, se estima como una medida correcta de administración de justicia la necesidad de establecer un sistema de impugnación a las sentencias de segunda instancia, sea por la vía del recurso de casación o de nulidad. De esta manera se evitaría el recurso de queja, suprimiéndose la medida disciplinaria que conlleva dicho recurso y que indefectiblemente afecta el principio de independencia.</p>	Solicitud de reforma legal
	ANTOFAGASTA	<p>Artículo 51 N° 8 de la Ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.</p>	<p><i>El No 8 del artículo 51 de la Ley 19.496, establece que todas las apelaciones concedidas en este procedimiento deben agregarse extraordinariamente a la tabla del día siguiente al ingreso de los autos a la respectiva Corte de Apelaciones, lo que constituye un error y deja prácticamente en la indefensión a las partes, porque debe considerarse que el ingreso se publica en internet en la página del Poder Judicial que aparece al día siguiente del ingreso y, por lo tanto, el apelante no tiene posibilidad concreta de concurrir a la vista de la causa, salvo que esté revisando materialmente el ingreso hasta las 14:00 horas, lo que constituye una carga que el legislador no ha previsto, máxime si se trata de procesos civiles que vienen de otras ciudades.</i></p>	Dificultades por normas legales
		<p>Artículo 14 letra e) del Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200 del año 1929.</p>	<p><i>De acuerdo a la disposición citada, deben ingresar anualmente al archivo nacional "los protocolos notariales, registros de hipotecas, registros conservatorios de bienes raíces de comercio y de minas, como también libros copiadores de sentencias y los expedientes judiciales de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de los territorios de Aysén y Magallanes que hayan cumplido treinta años de antigüedad"(sic), lo que constituye un contrasentido porque todos los estudios de títulos que tengan la antigüedad señalada deberán comenzar con las inscripciones que debieran obtenerse del archivo nacional, lo que demuestra una carga innecesaria y que eleva los costos para los usuarios respecto a los cuales debieran tener acceso a estos antecedentes en los respectivos Conseroadores de Bienes Raíces. Esta obligación legal se explica en la primera mitad del siglo pasado pero hoy no es necesario frente a la consolidación de las regiones y la necesidad de tener independencia administrativa respecto del nivel central, lo que por lo demás la Excm. Corte Suprema implícitamente lo ha sugerido en los antecedentes administrativos 1523-2013 al solicitar "las gestiones que resulten conducentes para dar solución al problema", pidiendo la creación de un departamento del archivo nacional en esta ciudad e "instando por la modificación del mencionado cuerpo legal o adoptando otra medida que estime pertinente".</i></p>	Dificultades por normas legales
	RANCAGUA	<p>Artículo 2° transitorio del Código de Aguas.</p>	<p><i>Aplicación del artículo 2° transitorio del Código de Aguas, considerando que se solicita la regularización de derechos de agua fundado en el uso del recurso hídrico en forma continua por el predio, surge la interrogante de si debe acreditarse el uso del agua con anterioridad al año 1981 por el propio solicitante o en el predio en que pretenden regularizarse.</i></p>	Duda de Interpretación

LEYES
ESPECIALES

<p>TEMUCO</p>	<p>Artículo 54 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 2° transitorio del Código de Aguas.</p>	<p>El artículo 2° transitorio del Código de Aguas ordena en el procedimiento administrativo de regularización de derechos de aprovechamiento que la Dirección de Aguas remita la solicitud y los antecedentes al juez de letras en lo civil competente aunque no exista oposición de terceros, con el objeto de que resuelva en juicio sumario (Art. 177 Código de Aguas).</p> <p>La duda que surge es en relación al legitimado pasivo en ese juicio y a su notificación para que sean oídos. ¿Debe aplicarse la notificación por avisos del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil por estar ante terceros cuya individualidad es difícil de determinar o corresponde notificar a la Dirección de Aguas (quien en la práctica remite oficio indicando que no es la legitimada pasiva)</p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>VALDIVIA</p>	<p>Artículo 182 de la Ley 18.290 de Tránsito.</p>	<p>El artículo 182 de la Ley 18.290 establece que la sanción del artículo 193 o 196 debe aplicarse disminuida o en grado de tentativa.</p> <p>La duda surge en cuanto a si la sanción a aplicar que la cita legal alude, disminuida o en grado de tentativa, abarca tanto la corporal y demás accesorias en atención a que la norma no distingue; o, si por el contrario, sólo corresponde morigerar la corporal y las demás se rigen por las reglas generales del delito consumado de los artículos 193 y 196 de la Ley 18.290.</p>	<p>Duda de interpretación</p>
<p>COYHAIQUE</p>	<p>Artículo 19 de la Ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.</p>	<p>El artículo 19 de la Ley 18.410 establece que para interponer el recurso de reclamación contra una multa deberá acompañarse una boleta de consignación a la orden de la Corte, por el 25% del monto de la misma.</p> <p>No obstante, la norma no establece un examen previo de admisibilidad sobre este aspecto.</p> <p>En consecuencia, la duda que surge es cuál es la sanción por el incumplimiento de esta obligación, en especial considerando que las sanciones son de derecho estricto. Asimismo, surge la duda respecto de la constitucionalidad de la imposición de una obligación pecuniaria para hacer procedente el recurso por el que precisamente se reclama de ella.</p>	<p>Duda de interpretación</p>
	<p>Artículo 151 de la Ley 18.695 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación con el artículo 19 de la Ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.</p>	<p>Tanto los artículos 151 letra d) de la Ley 18.695 como 19 de la Ley 18.410 imponen el cumplimiento de ciertos requisitos para la interposición de estos reclamos de ilegalidad.</p> <p>No obstante, no se establece un trámite de pronunciamiento de la admisibilidad por parte de las Cortes, ordenando, por el contrario, que se dé traslado a la autoridad respectiva en el caso de estos reclamos.</p> <p>En consecuencia, surge la duda respecto de si puede declararse inadmisibles algunos de estos reclamos cuando no cumplan con los requisitos exigidos en la norma, aun cuando no se establece esta sanción de manera expresa en las referidas leyes.</p>	<p>Duda de interpretación</p>
	<p>Artículo 38 de la Ley 18.287 que establece el Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.</p>	<p>El artículo 38 de la Ley 18.287 establece que no procederá el recurso de casación en los juicios de Policía Local. Esta norma recibe aplicación en una multiplicidad de materias, atendidas las leyes que han hecho aplicables lo dispuesto en la Ley 18.287.</p> <p>No obstante, las Cortes de Apelaciones han anulado fallos que no cumplen requisitos legales por la vía del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil.</p> <p>En consecuencia, se estima pertinente una modificación legislativa para incorporar el recurso de casación como medio de impugnar la validez de la sentencia definitiva, dadas las actuales controversias jurídicas que son de competencia de estos juzgados.</p>	<p>Solicitud de reforma legal</p>

Artículos 195 bis y 196 de la Ley 18.290 de Tránsito. (Introducidos por la Ley 20.770).

Que es imperativo señalar que los artículos 195, 195 bis y 196 introducidos por la Ley 20.770, que establecen las normas de determinación de las penas, transgreden, al menos, las garantías a un justo y debido proceso en relación a la garantía de igualdad ante la ley a la luz de los principios rectores del Derecho Penal y las Garantías Constitucionales consagradas en la Constitución Política y los Tratados Internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos.

Solicitud de
reforma legal